

SEPTIEMBRE 21 de 1923

56.^a REUNIÓN - 43.^a SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL CORONEL PEREYRA ROZAS Y DON ALBERTO H. CAROSINI

DIPUTADOS PRESENTES: Alemán Eugenio, Alfonso Felipe S., Amuchástegui José A., Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Aragón José M., Arámburu Juan B., Aráoz José Luis, Arnedo Rodolfo, Bard Leopoldo, Barrera Nicholson A., Bas Arturo M., Bausch Daniel, Beguiristain Manuel B., Bordabehere Enzo, Botinelli Juan B., Bréard Eugenio E., Bunge Augusto, Cafferata Juan F., Canale Pedro, Carbó Romeo, Carbone Luis A., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Ceballos Mariano P., Ceballos Rodolfo, Celsia Ernesto H., Correa Francisco E., Correa José A., Costanti Gerardo, Cristóbal Gumersindo A., Culaciati Miguel, Davel Ricardo J., Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duffy Eduardo N., Dussaut Rubén, Echagüe Alfredo, Empananza Francisco, Fernández Daniel, Ferreyra Andrés (hijo), Francioni Isaac, Frugoni Juan José, Gancedo Alejandro (hijo), García Tuñón Eduardo, Garayalde José M., Gatica Teófilo I., Gil Matías, González José Antonio, González Iramain Héctor, González Zimmermann A., Grau José M., Gschwind Otto G., Gherci Luis, Justo Juan B., Landaburu Laureano, Lencinas José H., López Héctor S., López Anaot Pedro, Lozano Antonio, Lloveras Ventura, Maidana Julián, Martínez Benigno, Martínez José María, Meyer Oscar C., Míguez Edgardo J., Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel, Moreno Pedro Antonio, Moreno Rodolfo (hijo), Muñiz Francisco J., Muzio Agustín S., Núñez José A., Núñez Pedro R., O'Farrell Juan A., Olaso Ezequiel S., Olmos José T., O'Reilly Guillermo R., Ortiz Roberto M., Otamendi José A., Oyhanarte Raúl F., Parodi Silvio E., Parry Roberto, Paz Alberto J., Pereyra Rozas Ricardo, Pinto Manuel (hijo), Pintos Angel, Pradère Carlos M., Quinteros Eduardo F., Quirós Herminio J., Repetto Nicolás, Rocca Manuel, Rodeyro José León, Rodríguez Jorge Raúl, Romero Day Frank, Rubilar Francisco, Saccone Romeo David, Sánchez Elia Angel, Sánchez Sorondo Matías G., Santa María Arturo, Seravia Pablo, Siri Abdulio F., Solari Felipe C., Spinetto Alfredo L., Taboada Diógenes, Tamborini José P., Texier José M., Tomaso Antonio de, Tomaszewski Eduardo M., Trucco Rómulo B., Vega Abraham de la, Verduga José María, Walther Adolfo; PRESENTE DESPUES DE HORA: Claros Ernesto; AUSENTES CON LICENCIA: Acosta Abel, Alvarado Manuel R., Alvarez Hayes Justo, Antille Armando G., Astrada Manuel J., Capurro Juan José, Cárcano Ramón J., Corvalán Santiago E., Gallardo Manuel, Goyri Emilio, Guido Mario M., Loustau-Bidau Pedro, Martínez José Heriberto, Moral Ernesto M. del, Patrón Costas Néstor, Ricci Roberto J., Ruiz Manuel S., Santamarina Antonio, Soler y Urquiza Justo J., Toledo Antonio B., Uriburu Francisco; AUSENTES SIN AVISO: Albarraeín Belisario, Albarraeín Francisco L., Amado Isaías R. (*), Aráoz Miguel A., Barbich M. José, Barceló Alberto, Bary Alberto de, Catalán Emilio, Errecart Juan A., Escobar Adrián C., González Calderón Juan A., Massoni José S., Miñones Alejandro, Peña Solano, Rodríguez Calixto, Torre Lisandro de la, Vergara Valentín.

SUMARIO

- 1.—Se da por aprobada el **acta** de la sesión anterior.
- 2.—**Asuntos entrados:**

I—Mensaje del poder ejecutivo con que acompaña los informes solicitados por la honorable cámara sobre **yacimientos petrolíferos**.

II—**Despachos** de comisión.

III—**Peticiones** particulares.

IV—Proyecto de ley del señor diputado **Romero Day** prohibiendo la impresión, circulación y emisión de billetes que hagan las veces de **papel moneda**.

V—Proyecto de ley del señor diputado **Toledo** sobre derecho de **importación al arroz**.

- 3.—Concédese **licencia** para faltar a sesiones a los señores diputados del **Moral y Toledo**.
- 4.—Proyecto de resolución, aprobado, de varios señores diputados relativo a la situación de los **obreros del Alto Paraná**.
- 5.—**Rectificación** del señor diputado **Bunge** relacionada con conceptos vertidos en la sesión anterior.
- 6.—La honorable cámara autoriza a la comisión de peticiones y poderes a retirar de la orden del día los **despachos** sobre **pensiones**.

(*) No incorporado

- 7.—Pedido de **pronto despacho** formulado por el señor diputado **Sánchez Elía**.
- 8.—Moción, aprobada, del señor diputado **Bard** sobre **limitación de tiempo en el uso de la palabra**.
- 9.—Aclaración del señor diputado **Arám-buru** con respecto al asunto registrado con el **número 7**.
- 10.—Moción, aprobada, del señor diputado **Molinas** para que se amplíe a siete el número de miembros que componen la **comisión investigadora de los ferrocarriles del Estado**.
- 11.—**Integración** de la comisión investigadora de los ferrocarriles del Estado.
- 12.—Indicación del señor diputado **Andreis** para que se autorice a la comisión investigadora de los ferrocarriles del Estado a funcionar durante el receso.
- 13.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación del trabajo en el proyecto de ley de varios señores diputados sobre **jubilación de empleados de banco**.
- 14.—**Homenaje** tributado a la memoria del doctor Mariano Demaría.
- 15.—Termina la consideración del asunto registrado con el **número 13**; despacho de la comisión de legislación del trabajo en el proyecto de varios señores diputados sobre **jubilación de empleados de banco**.
- 16.—Lectura del decreto de honras fúnebres dictado por el señor presidente de la honorable cámara con motivo del fallecimiento del doctor Mariano Demaría.
- 17.—Consideración del despacho de la comisión de legislación del trabajo en el proyecto de ley de varios señores diputados sobre **ley básica de seguro nacional**.

—En Buenos Aires, a 21 de septiembre de 1923, siendo la hora 16, ocupan sus bancas en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Queda abierta la sesión con 82 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. López Anaut. — Hago moción de que se suprima la lectura del acta y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Habiendo asentimiento así se procederá.

Sres. Bard, Rocca y Bunge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se la concederé a los señores diputados después que se haya dado cuenta de los asuntos entrados.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, septiembre 20 de 1923

Al honorable congreso de la nación:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad contestando el pedido de antecedentes sobre los yacimientos petrolíferos fiscales sancionado en la sesión de fecha 20 de abril último.

De acuerdo con la comunicación de vuestra honorabilidad acompaño los siguientes antecedentes:

1º — Las memorias parciales correspondientes a los años 1921 y 1922 elevadas por los jefes de servicio en Comodoro Rivadavia a la administración local y por los jefes de división de esta dirección general al director general. (Legajos 2, 3, 4 y 5).

2º — Copia de la nota enviada por el gerente al administrador de Comodoro Rivadavia el 19 de abril de 1921 y del dictámen del asesor letrado y resolución ministerial a que la misma se refiere. (Legajo 6).

3º — Copia de los siguientes expedientes: M. 20, 21 (legajo 7); M. 22/922 (leg. 8); D. G. 7/922 (leg 9); D. G. 20/922 (leg. 10);

Sr. Sánchez Elía. — Pido la palabra.

Quiero dejar bien sentado, señor presidente, que no he hecho ningún cargo, ni remotamente, a la comisión. Simplemente, como la cámara va a tener que avocarse, como ha dicho muy bien el señor diputado, dentro de pocos días el estudio de este problema, desearía que no quedara esa expectativa en el ambiente.

Sr. Arámburu. — Creo que en la próxima semana tendrá la cámara el despacho de la comisión.

10

AMPLIACION DE COMISION

Sr. Molinas. — Pido la palabra.

Para hacer moción en el sentido de que la comisión investigadora de los ferrocarriles del Estado sea ampliada a siete miembros.

Sr. Landaburu. — No hemos oído.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — El señor diputado por Santa Fe propone que la comisión investigadora de los ferrocarriles del Estado, que la cámara resolvió se compusiera de cinco miembros, sea ampliada a siete.

Sr. Amuchástegui. — ¿Está constituida ya la comisión?

Sr. Molinas. — El grupo demócrata progresista ha quedado sin representación. Además podrían colaborar en la comisión diputados como el señor Gancedo, que ha intervenido en el debate sobre la investigación, ha presentado un proyecto de ley sobre los ferrocarriles del Estado y publicado un libro sobre la materia.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La honorable cámara decidirá si se aumenta a siete el número de miembros de la comisión investigadora de los ferrocarriles del estado.

— Resulta afirmativa.

11

COMISION INTEGRADA

Sr. Secretario (Zambrano). — La presidencia ha designado a los seño-

res diputados Molinas y Barbich para integrar esa comisión, de acuerdo con lo resuelto por la honorable cámara.

12

INDICACION

Sr. de Andreis. — Pido la palabra, para una cuestión que se refiere al asunto que se acaba de votar.

La comisión va a trabajar durante el receso, y es necesario que la cámara la autorice para hacerlo. Necesitará también tener todas las facultades de la cámara para poder investigar debidamente las denuncias formuladas contra los ferrocarriles del Estado.

Solicito, entonces, que la cámara conceda a la comisión investigadora todas las facultades que ella tiene para investigar y que la autorice a proseguir en sus tareas durante el receso parlamentario.

Sr. Bunge. — Amplió la moción en el sentido de que se autorice también a las demás comisiones para funcionar durante el receso, como se ha hecho todos los años.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Hay una resolución general sobre el punto, que se va a leer.

Sr. Secretario (Zambrano). — Resolución número 5, página 88 del reglamento: La cámara de diputados resuelve que las comisiones permanentes y especiales puedan funcionar durante el receso.

Sr. de Andreis. — A pesar de que conocía la disposición del reglamento, quería que la cámara así lo declarara expresamente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Hay asentimiento.

13

JUBILACION DE EMPLEADOS DE BANCO

(Véase el número 48)

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se pasará a la orden del día.

Tiene la palabra el señor diputado Bunge.

Sr. Bunge. — La limitación de tiempo que ha impuesto la mayoría de la cámara no contribuirá a ilustrar el debate sobre una cuestión de tan fundamental importancia como lo es el seguro social.

Es realmente lamentable que se inicie en esta forma, impidiéndonos a los representantes de la minoría ilustrar con hechos los conceptos fundamentales sobre este asunto. Trataré de utilizar el limitado tiempo de que dispongo ahora en la forma más conveniente posible.

La disidencia de la diputación socialista en este caso consiste en apariencia en un detalle. En el despacho de la minoría que figura en la página 611 de la orden del día número 50, se propone en el artículo 1º la creación, como entidades iniciadoras del seguro nacional, de seis cajas sociales obligatorias, entre las cuales figura como 5ª la de trabajadores bancarios y de seguro. Nuestra disidencia, en apariencia de detalle, significa una importante disidencia de fondo sobre todos los aspectos que tiene la cuestión del seguro social. Son dos principios opuestos: en un caso, servir la aspiración de un pequeño gremio en interés exclusivo del mismo; en el otro, la incorporación a una organización armónica y homogénea de seguro nacional de todos los trabajadores de la república en la industria, el comercio...

—Murmuros en las bancas.

Sr. Bunge. — Ruego al señor presidente que haga hacer silencio. Los diputados que no deseen escuchar sería preferible que conversaran afuera.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — El grupo que más conversa lo tiene a sus espaldas el señor diputado.

Sr. Bunge. — Me refiero a los que perturban, señor presidente. A todos debe dirigirse la presidencia.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Sí, señor diputado, a todos.

Sr. Bunge. — Decía que sostenemos contra el concepto de la exclusiva ju-

bilación de gremios limitados de empleados en el interés corporativo de los mismos, la incorporación a una gran organización armónica de todos los trabajadores de la industria, del comercio, de los transportes marítimos, de las artes gráficas, del periodismo, bancarios y de seguros, y a los de las industrias regionales concentradas, y a los miembros de las asociaciones de socorros mutuos, que el proyecto admite como cajas sociales libres, en una gran organización solidaria y armónica de seguro integral, que comprenda el seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, y constituya las bases para la organización de un verdadero seguro de la viudez y la orfandad.

No me extraña que la comisión haya formulado un despacho por separado en favor de los empleados bancarios a pesar de haber formulado uno que instituye de golpe cuatro o cinco cajitas para los empleados permanentes, y únicamente para ellos, de la industria y del comercio y algunos otros ramos de ocupación, porque el procedimiento que ha seguido para estudiar esta cuestión ha sido el inverso del que dictaban el buen sentido y las reglas de todo método de trabajo. En vez de empezar por los conceptos generales para ir luego a aplicarlos en las cuestiones particulares, en vez de empezar por los asuntos que pudieran motivar menos discrepancia para terminar por aquellos en que podría ser mayor la disidencia, sin haber orientado por ningún concepto básico, inició el estudio del proyecto de reforma a la ley de jubilación de ferroviarios; en segundo término, estudió el proyecto de jubilación de bancarios, tal vez presionada en esos momentos por comisiones de empleados de ese ramo; luego empezó a estudiar por separado proyectos de jubilaciones de empleados de la industria, luego las de empleados de comercio, hasta que advertida por un anteproyecto mío de que en esa forma no iba a terminar nunca su trabajo, tomó una idea o, más bien dicho, algunas "palabras" de ese mi anteproyecto instituyendo por una sola ley, que es la que forma el despacho de la mayoría

número 50, varias cajas par adichos empleados.

No es extraño tampoco, dada la falta de ordenación del trabajo, que aun en el despacho que instituye varias cajas simultáneas se las haya creado enteramente cerradas, separadas las unas de las otras, dseligadas en absoluto del concepto del seguro social, imitando en forma disimulada los peores precedentes de nuestra legislación en materia de jubilaciones.

Llego con esto a la oposición fundamental de concepto. La disidencia socialista se inspira en los principios sancionados por la experiencia de toda la Europa culta en materia de seguro social. Los despachos de la mayoría de la comisión dimanar del más espúreo origen posible, de la ley de jubilaciones de funcionarios nacionales, tal como ha sido subvertida y adulterada por las reformas que suprimieron todo lo bueno que tenía la ley inicial.

¿Qué razón de ser tiene una ley especial de jubilaciones para diez o doce mil empleados bancarios? ¡Absolutamente ninguna! Con ese criterio, la mayoría de la comisión debió presentar cuatro o cinco proyectos separados en favor de los empleados de la industria, del comercio, del transporte, de las artes gráficas y el periodismo. Y si no hubiera sido por mi anteproyecto, habríamos corrido el riesgo de discutir cinco leyes "básicas" especiales de jubilaciones, una por gremio.

No puede haber procelimiento más equivocado y más detestable hasta desde el punto de vista de la economía del trabajo parlamentario, no ya del punto de vista de la organización social del seguro popular. Ya vemos el trabajo que da a la cámara la sola ley de jubilaciones en importante escala que rige hasta hoy, la de jubilación de los ferroviarios.

Con el despacho de la comisión tendremos que discutir de aquí unos dos o tres años cinco nuevas leyes orgánicas para otras cajas o cajitas de jubilación en beneficio de determinados

gremios. Los señores diputados sufrirán la presión de intereses corporativos, enteramente ajenos y rivales los unos de los otros, y contrarios, por ser exclusivamente corporativos, a los de toda la masa trabajadora del país. Tendremos así que estar remendando y discutiendo continuamente detalles sin llegar jamás al fondo de la cuestión, aplazándola indefinidamente, hasta hacer acaso imposible la implantación del seguro nacional, por más que la cámara vaya a votar una ley básica.

Este sistema de leyecitas especiales para cada gremio, instituyendo cajitas cerradas para cada uno, es único en el mundo. No podrá rectificármelo el señor presidente de la comisión, con toda su erudición sobre actualidades legislativas.

En Alemania, que es la iniciadora en estos asuntos con la ley de seguro de invalidez y de vejez del año 1889, que coronó la obra iniciada en 1883 con el seguro de enfermedad seguido por el seguro de accidentes del trabajo, hay un solo gran sistema de rentas de vejez formado por dos organizaciones paralelas, la de los obreros y la de los empleados. Esta bifurcación, debida a los prejuicios de casta que intentó fomentar el gobierno imperial alemán, está desapareciendo en estos momentos; y las dos organizaciones paralelas van a ser refundidas en un gran organismo nacional, aun cuando ya son ellas concordantes y mantienen íntima relación.

En Austria, segundo país que implantó una forma de seguro social, con los seguros de enfermedad y de accidentes, ellos forman también una sola gran organización nacional descentralizada y popular, basada, como la alemana, en las antiguas sociedades de socorros mutuos y en cooperativas patronales de seguro contra accidentes en las que cooperan las asalariados.

En Hungría, una organización más homogénea y uniforme es también descentralizada y se extiende a todos los trabajadores del país.

La ley suiza vigente de seguro na-

cional, que se limita a subvencionar a las sociedades de socorros mutuos implantando el seguro obligatorio sólo contra accidentes del trabajo, va a ser reformada en estos momentos, orientándose la reforma en las líneas generales más grandiosas que se hayan trazado jamás en el mundo, implantando el seguro en masa de toda población, el seguro de maternidad, de vejez, de invalidez y contra accidentes. Toda la población, ricos y pobres, asalariados y patrones, queda comprendida en el seguro, no obstante ser Suiza un país mucho más federativo que el nuestro, con una vida económica de origen medioeval, en que hay, por lo tanto, viejos y arraigados intereses corporativos. Sin embargo, prima ya en ella, y ha de triunfar en la reforma ya sancionada por el consejo consultivo, el gran concepto social de la organización homogénea.

En Inglaterra, la ley de pensiones a la vejez es un gran organismo nacional basado en las comunas. La ley de seguro nacional es también un gran organismo social basado en las "sociedades amigables", que son el equivalente de nuestras sociedades de socorros mutuos, las que administran los servicios de asistencia de la enfermedad y la maternidad bajo la superintendencia del organismo nacional que administra los subsidios por invalidez y fiscaliza las pensiones a la vejez.

En Francia la única ley vigente de retiros a la vejez es también una sola gran organización. Los proyectos que se han presentado en los últimos años pasan todos por alto los estrechos intereses corporativos. No se les ocurre pensar en el gravísimo error de crear cajitas para cada gremio, como si estuviéramos en plena Edad Media. Instituyen la gran organización incorporando a ellas todas las asociaciones que se han ido formando libremente durante un siglo de iniciativas populares espontáneas de previsión social.

Suecia, donde el seguro de enfermedad es voluntario, administrado por las sociedades de socorros mutuos, llamadas allí cajas de socorro, tiene por ley

el seguro popular de vejez obligatorio. Toda la población en masa, sean cuales fueren sus condiciones pecuniarias, está incorporada a ese seguro. Cada uno debe contribuir en su respectivo municipio, y fiscalizan el funcionamiento órganos emanados de los concejos municipales; es decir, un organismo popular descentralizado percibe las contribuciones y controla la aplicación de las pensiones bajo la dirección central. Actualmente se ha considerado, sin embargo, insuficiente ese sistema; se lo considera demasiado burocrático y limitado, y se proyecta instituir el seguro social completo, porque se cree que sólo la organización esencialmente descentralizada del seguro de enfermedad puede servir de subestructura eficaz para controlar como es debido las prestaciones del seguro de vejez e invalidez y, sobre todo, para instituir la función esencial de estas leyes, que no es el fondo de subsidios en efectivo, única cuestión que ha considerado la mayoría de la comisión. Muy lejos de eso, la función esencial es la prevención de la invalidez, la prevención de la miseria, del sufrimiento, por la construcción de grandes sanatorios, socialmente administrados, por la organización de grandes servicios de fiscalización sanitaria y de profilaxis. Y como todo eso falta en la ley sueca, a pesar de ser una gran organización homogénea se la quiere transformar ya después de pocos años de experiencias.

En Noruega también el seguro obligatorio vigente, que es el de enfermedad y accidentes, es una gran organización descentralizada, pero homogénea, que no hace diferencias gremiales y que está formada por organismos locales que comprenden a todos los gremios.

Todos los proyectos belgas, de los cuales uno fué votado por la cámara de diputados en el año 1911, pasan por alto el concepto medioeval de las pequeñas organizaciones corporativas, lo mismo que los nuevos proyectos franceses, que sólo toman en cuenta la posibilidad de cajas gremiales voluntarias. Es verdad que existen en Francia, In-

glatterra y Alemania cajas mineras de pensiones, pero su razón de ser es evidente: se trata de grandes organismos históricos que datan de la edad media, de organismos que aseguran más de un millón de obreros en Alemania, varios centenares de miles en Francia y más de millón y medio en Inglaterra.

En Norte América se han presentado proyectos muy interesantes. Las bases de uno de ellos fueron sancionadas por la legislatura del estado de California. Todos ellos se inspiran en el mismo gran principio que dicta la disidencia socialista; todos ellos pasan por alto cualquier prejuicio corporativo; proveen grandes organizaciones armónicas y, sin embargo, descentralizadas.

Podría citar lo mismo de Checoslovaquia. En la propia Rusia bolchevique, donde el gobierno de la revolución quiso dar tanta importancia a las organizaciones gremiales, hasta hacerlas en ciertos respectos órganos oficiales del mismo, se ha prescindido en absoluto del principio corporativo para implantar el seguro social.

En ninguna parte hay instituciones como las que nos aconseja la mayoría, completamente cerradas, aisladas las unas de las otras y con administraciones exclusivamente burocráticas.

Ese es el más grave mal con que nos amenazan los despachos de la mayoría de la comisión; si por desgracia, alguna vez llegan a ser ley, serán una fachada de papel pintado; no serán jamás una realidad íntima de la vida social argentina, porque son organismos centralizados radicados en la capital, administrados por empleados a sueldo, sin control inmediato de los presuntos beneficiarios, dirigidos por un grupo de directores irresponsables una vez elegidos, hasta que terminan el período de su mandato.

Carece, pues, el despacho de la mayoría del concepto que vitaliza a las grandes entidades del seguro social: el concepto de la cooperación, de la iniciativa espontánea de cada uno y de todos los individuos que deben participar en los grandes organismos de pre-

visión. Carece del concepto de la responsabilidad que impone a los administradores de una organización social el solo hecho de ser mandantes de los asociados, esencialmente revocables por su asamblea.

Ha olvidado la mayoría que estas organizaciones tienen por alma la asamblea anual de todos los socios, o sea los asegurados. Ignora la obligación de rendir cuenta de su mandato a los asegurados. No ha hecho sino copiar el régimen burocrático de nuestra caja nacional de jubilaciones y pensiones, en mala hora imitado también para la caja de jubilaciones de ferroviarios y la de empleados de servicios públicos a cargo de empresas particulares.

Pero en este caso es mucho más grave el error que en los anteriores. Es posible administrar burocráticamente, con una organización centralista, una caja de jubilación de ferroviarios, porque no hay sino una docena escasa de empresas ferroviarias, que por el solo hecho de existir están sometidas al control inmediato del estado argentino, que están, por las leyes de concesión y la que rige sus relaciones con el estado, obligadas a proporcionar todos los informes, y que incurren en delito al no inscribir en la organización del seguro a sus empleados y obreros. Está, pues, centralizada la dirección de todo el personal. Puede entonces centralizarse el seguro de vejez del mismo. Pero asimismo, esa organización burocrática y centralizada es enormemente costosa. Ya la caja de jubilaciones ferroviarias gasta el 3,4 por ciento de sus entradas permanentes por aportes en administración. Y ocurren con ese centralismo verdaderas dilapidaciones, como ésta: para verificar el derecho a jubilación por invalidez de un ferroviario radicado en Mendoza o en Tucumán, se hace necesario el traslado, a gran costo, de uno o dos de los tres médicos residentes en la capital que tiene la caja.

¿Qué va a ser de estas cajitas centralizadas de seguro de gremios diseminadas por toda la república, que traba-

jan en este caso dispersos en miles de sucursales o pequeños bancos, cada uno de ellos autónomo? ¿Cómo se va a verificar que los empleadores han cumplido con el deber de contribución que les va a imponer la ley? ¿Cómo van a participar efectivamente todos los asegurados en la elección del directorio de la caja? ¿Cómo van a controlar sus gestiones? ¿Podemos imaginarnos una caja de empleados y obreros de la industria administrada burocráticamente en Buenos Aires, cuando hay en la república más de cien mil establecimientos industriales y más de medio millón de obreros de la industria diseminados en una superficie de dos millones de kilómetros y en 2.500 centros de población? ¿Es imposible hacer efectivo control alguno!

Por otra parte, se instituye por los proyectos la incorporación al seguro de los empleados y obreros "permanentes", nada más. ¿Qué se entiende por obreros y empleados permanentes? El sentido es puramente convencional. Sabemos que hay industrias temporarias, y que no hay nada más instable que la ocupación de los jornaleros que forman la gran masa asalariada de la república, pues según el censo de 1914 hay un millón de jornaleros sobre dos millones y pico de trabajadores asalariados en el campo y en la ciudad. "Permanentes" no son en realidad sino los empleados de oficina y los capacitados. Lo mismo ocurre con el comercio, los transportes marítimos, etc.

Los despachos de la mayoría excluyen de hecho toda la masa trabajadora sufriente de la república, a los que más necesitan del seguro nacional, a los que más derecho tienen para reclamar que una ley les organice en un gran conjunto de previsión integral.

He aludido a la importancia permanente de las prestaciones preventivas sobre las indemnizaciones en efectivo. Deseo detenerme un momento en ella porque ignorarlo es, si cabe la más grave de las fallas del despacho de la mayoría de la comisión.

El ejemplo lo tenemos ahora en Alemania. El valor de las prestaciones en

dinero del seguro nacional se ha reducido prácticamente a la nada por la desvalorización del marco. Sin embargo, ese grandioso organismo sigue funcionando, y en medio de la terrible crisis económica sigue prestando servicios inestimables, porque siguen en pie los grandes sanatorios, los grandes hospitales, los barrios que se construyeron antes de la guerra; siguen en plena actividad todas las organizaciones de fiscalización y de previsión. Y son ellas las que siguen vitalizando el organismo del seguro nacional, haciendo de él uno de los bienes más preciados de la cultura del país.

Todo eso lo ignoran los despachos de la mayoría: ellos no hacen sino instituir, con el nombre imitado de "cajas sociales de previsión", una serie de organismos burocráticos de base corporativa dedicados exclusivamente a "prometer" jubilaciones por invalidez o por vejez y tal vez pensiones de viudez a determinado número de empleados permanentes. Merecen en realidad un nombre contrario de "cajas antisociales de imprevisión". Porque no son cajas "sociales", pues excluyen de la asociación a aquellos que aparentemente benefician. No son cajas sociales porque crean privilegios en favor de la minoría del personal permanente de nuestros establecimientos económicos. No son cajas sociales, porque no organizan a los contribuyentes en cooperativas de previsión. En cambio, son antisociales al instituir cajas cerradas que limitan la libertad de tránsito, que es el bien más precioso conquistado por la revolución del siglo XVIII para la clase trabajadora: la libertad de cambiar de ocupación, de localidad, sin perder los derechos adquiridos, es prácticamente suprimida por estas cajas cerradas, porque cada uno de esos cambios de inscripción reclamará complicadísimos trámites burocráticos en caso de llegarse a obtener el reconocimiento de los derechos adquiridos en el pasaje a través de una serie de cajas, que pueden ser diez o quince pasajes en la vida del trabajador.

Son cajas antisociales también por-

que crean intereses corporativos rivales en la gran clase explotada.

Y no son cajas sociales de previsión porque no prevén nada. Se limitan a obligar a los trabajadores, aparentes beneficiarios, a soportar un descuento de cinco por ciento en sus salarios; a obligar platónicamente, sin mecanismo de control alguno, sin pena alguna que pueda hacerse prácticamente efectiva, a los empleadores, a contribuir con el ocho por ciento. En cambio, no crean ningún derecho inmediato. Por callar la cuestión esencial mantienen a los aparentes beneficiarios en el grave error de creer que puede acordárseles los enormes privilegios de la caja nacional de jubilaciones y pensiones, jubilación sin límite de edad o a los cincuenta años de edad, jubilación con el sueldo de los últimos años, cuando no de los doce meses, y mantienen en ellos el concepto equivocado de que todo debe sacrificarse al retiro del trabajo a la edad más temprana posible, sin tener en cuenta las necesidades inmediatas en condiciones de vida, en organización gremial, en seguro, enfermedad, en seguro de maternidad para su compañera, para sus hermanas, para sus hijas.

Aun cuando fuera posible que las futuras leyes orgánicas que habrá que discutir "mañana" — un mañana que hay que poner entre comillas porque puede convertirse en el clásico "mañana" criollo — aun admitiendo que pueda acordarse mañana esas jubilaciones sin límite de edad con el sueldo íntegro o a más tardar a los cincuenta años de edad, ¿qué valor perdurable tiene esa única prestación cuando nuestro peso se desvaloriza progresivamente?

Mientras no se cree una organización que sea de asistencia, de verdadero servicio sanitario y también de profilaxis, a la par que de auxilios en efectivo, no podrá considerarse asegurado el porvenir de nuestros trabajadores. ¿De qué le sirve a un joven empleado que se enferma de tuberculosis el cobrar como pensión la mitad del sueldo que ganaba, — de acuerdo

con el mal modelo de la caja de jubilaciones, sólo podría tener esa pensión a los diez y siete años; y supongamos que se resolviera acordarla a los diez años — de qué le sirve si no hay sanatorios bien administrados y controlados por los propios asegurados donde pueda tratarse? ¿Qué le interesa más: sanar, verse libre de la terrible garra de esa amenaza mortal, o percibir una pensión de invalidez tumbado a la bartola, para caer en la destrucción en poco tiempo?

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Ha vencido el término, señor diputado.

Sr. Bunge. — Ruego a los señores diputados que tienen la bondad de escucharme que me concedan un poco de tiempo más. Se trata de conceptos fundamentales; soy el único miembro de la minoría y también el único del sector socialista que va a hablar en este momento.

Sr. Ferreyra. — Podríamos concederle diez minutos más.

Sr. Bunge. — Yo aceptaría los diez minutos si no quieren los señores diputados concederme más, pero me haría falta hasta media hora.

—Se llama para votar.

Sr. López Anaut. — Si no hay oposición...

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Hay una sanción de la cámara que sólo puede ser modificada por la misma cámara en mayoría.

—Después de unos momentos:

Sr. Bunge. — Ya se han perdido diez minutos llamando. Podría continuar exponiendo y se habrían ganado diez minutos de mi exposición.

Ruego, entonces, que no insistan los señores diputados, y si hay asentimiento de los señores diputados presentes...

Varios señores diputados. — ¡No! ¡No!

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — No hay asentimiento.

—Se continúa llamando, y obtenido quórum:

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — El señor diputado por la capital, que está haciendo uso de la palabra, como la cámara voto limitarla a media hora en general solicita de la cámara una prórroga de ese tiempo.

Se votará.

—Resulta negativa contra 31 votos, sobre 81 señores diputados presentes.

Sr. Bunge. — Eso me dará suficiente descanso para pronunciar el resto de mi discurso con mayor detenimiento, en la discusión en particular de cada uno de los artículos.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar en general el despacho.

—Resulta afirmativa.

—En discusión en particular el artículo 1º.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Este artículo expresa los graves inconvenientes de la creación de una caja cerrada en exclusivo beneficio de una corporación tan poco numerosa como la de empleados bancarios.

Propongo en substitución del artículo primero el de mi proyecto en disidencia, que figura en la página 611, que ruego al señor secretario se sirva dar lectura, reservándome dar después las razones de la substitución que propongo.

—Se lee:

“Artículo 1º — Quedan constituidas por esta ley como entidades organizadoras iniciadoras del seguro nacional las siguientes cajas sociales: de trabajadores de la industria; de trabajadores del comercio; de trabajadores de las artes gráficas y del periodismo; de trabajadores marítimos; de trabajadores bancarios y de seguro; de cajas regionales obligatorias”.

Sr. Bunge. — La razón de mi proposición es la siguiente: además de los

principios sociales que he expuesto, la economía y la eficacia de la administración. Crear esta caja y luego por otro lado otras cuatro o cinco cajas burocráticas centralizadas, determina una superposición, un desdoblamiento absurdo de funciones y de empleos. La caja de empleados bancarios tendrá que crear agencias de fiscalización en todas las ciudades del país, para cada una de las sucursales bancarias y de los pequeños bancos, dispersos en ellas, para verificar si todos cumplen las obligaciones que les impone platónicamente el proyecto de la mayoría. A su vez la caja cerrada de empleados y obreros de la industria que crea la mayoría de la comisión, las de empleados y obreros de las artes gráficas y del periodismo, la del comercio, etcétera, tendrán que tener organizaciones locales propias de fiscalización en cada una de las ciudades y poblaciones, aun en los pequeños pueblos de la república. Se producirá así el caso típico de la anarquía, del individualismo económico en su fase más atrasada pintada por H. G. Wells en uno de sus libros, el que se titula “Nuevos mundos en vez del viejo”, cuando pinta la madrugada en una calle cualquiera de una pequeña población: llega un carro de lechero a depositar medio litro en una de las casitas con gran ruido de latas y esfuerzo del caballo que arrastra; deposita dos o tres cuadras más allá, un litro, dos litros más allá; otro medio litro en otra casa. Entretanto, llega otro carro de lechero y siguen dos, tres, cuatro, cinco más, cada uno de los cuales tiene que atender a una casa en cada cien o doscientos metros; y en total, para hacer la distribución de un escaso número de litros de leche en el pequeño radio de una calle de suburbio, se necesitan cinco, ocho, diez carros de lechero. Y lo mismo pasa con los demás repartidores, los panaderos, etcétera.

De igual manera, las cajas superpuestas y aisladas tendrán que gastar una enormidad en personal en cada una de las localidades de la república, mientras que implantándose la institución homogénea que propongo, que funciona to-

talmente bajo la superintendencia del directorio del seguro nacional, con una organización descentralizada, creando en cada localidad cajas locales mixtas de fiscalización que administren al mismo tiempo el seguro de enfermedad y de maternidad en colaboración con las sociedades locales de socorros mutuos, se tendrían decenas de miles de inspectores gratuitos; porque cada una de las cajas de socorros mutuos estaría interesada en fiscalizar que cada patrón cumpla con los deberes que le impone la ley. Se haría así una administración eficaz y poco costosa, mientras que las cajas aisladas que propone la comisión, además de enormemente costosas, serán ineficaces.

Propongo además, para el caso de rechazarse mi moción, que se vote por partes este artículo, porque pediré que se vote en los siguientes términos: “créase la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados de empresas bancarias y “de seguros”.

Esta proposición se funda en dos razones. La primera: ampliar el personal de la caja, dándole así bases financieras más sólidas. La experiencia universal demuestra que las cajas con diez o doce mil contribuyentes cuentan con el extremo mínimo para bases financieras deleznales. Si se incorpora a los trabajadores de seguros, se tendrán cinco mil asegurados más, cuyos aportes darán mayor estabilidad a esta caja en caso que se incurra en el error de instituir la por separado. Por otra parte, esas empresas de seguros son en realidad empresas bancarias; es típico del empirismo con que se procede en estos casos excluir a los trabajadores del seguro de entre las empresas bancarias, cuando las empresas de seguros son bancos que operan lo mismo que los demás, con fondos confiados a su custodia por el público; la única diferencia es el carácter de sus operaciones: esos fondos que el público les confía en custodia se destinan a abrir créditos por indemnizaciones por causas de muerte, incendio, accidentes del trabajo y demás riesgos. Basta recordar el hecho de que en el Uruguay la caja oficial de seguros

se llama “banco de seguros del estado” para demostrar que no puede argumentarse en forma alguna en sentido contrario a la tesis que sostengo, de que las empresas de seguros son empresas bancarias.

Hay una razón más que demuestra la conveniencia de incorporar las empresas de seguros a esta caja. Por lo mismo que se trata de una caja poco numerosa, cuya administración será costosísima, es necesario que vaya allí también el personal más competente en materia de seguros en general, que es el que trabaja en las operaciones comerciales de esta clase; podrán ellos valuar mejor las disponibilidades de la caja y las obligaciones que ella pueda contraer sin el riesgo de caer en la bancarrota.

Se explica por esto que hayan circulado notas oponiéndose a la inclusión de los empleados de seguros, por parte de empleados bancarios que por tener ya treinta años de servicios creen que esta caja debe acordarles jubilación con el último sueldo desde el mismo momento en que se instituya, no obstante que no han contribuido con un solo centavo, contrariamente a lo que hará el personal joven, el cual, cuando llegue a la edad de jubilarse, encontrará que no tiene cómo percibir la jubilación prometida.

Considero suficientes, por el momento, las razones que he dado en favor del reemplazo de este artículo, y para que en caso de que sea votada en su primera parte, se agregue lo propuesto.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión no acepta, señor presidente, la enmienda propuesta por el señor diputado Bunge, por razones que yo no tendría inconveniente en exponer en la discusión en general de la orden del día número 50.

En cuanto al agregado referente a las empresas de seguros, debo decir que fué considerado especialmente en la comisión de legislación del trabajo y fué rechazado. Tengo, pues, que sostener ese dictamen; pero advierto que la situación de los empleados de seguros está contemplada en la orden

del día número 50, que es un despacho único por el cual se crean diversas cajas de previsión social, inspirándose en un concepto gremial. Me he de referir también a eso al discutirse en general la orden del día número 50.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el artículo 1º.

Ser. Bunge. — Propongo que se vote hasta "bancarios".

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Bunge. — Propongo que se vote el agregado "y de seguros".

Sr. Anastasi. — La comisión no acepta este agregado, por las razones que ya se han dado, porque se trata de una situación ya contemplada en la orden del día número 50.

—Se vota el agregado propuesto y se rechaza.

—Se vota el resto del artículo 1º y es aprobado.

Sr. Verduga. — Hago indicación para que el artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Así se hará.

—En consideración el artículo 2º.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Propongo que en substitución de este artículo se voten los artículos 13 a 28 del despacho en disidencia que figura en la página 615. Al hacerlo es evidente que no pretendo que la cámara acepte lo que propongo, porque sé que hay opinión hecha en la mayoría para votar el despacho de la comisión, pero me guía un propósito serio y honesto de información para los señores diputados y para el público, para que no tengan más remedio que darse cuenta, ya que se me ha limitado el uso de la palabra en general, de lo que yo sostengo, bien inspirado, en interés de los trabajadores bancarios

lo mismo que de los demás trabajadores de la república.

Solicito, pues, la lectura, y me reservo el derecho, dentro del tiempo de diez minutos, de fundar la razón de ser este articulado, advirtiéndole que no es propósito de obstrucción el que me anima. Son los artículos de 13 a 28.

Sr. Amuchástegui. — La cámara ya los conoce.

Sr. Bunge. — Tengo derecho a pedir su lectura.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Dentro de los diez minutos.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Sí, señor diputado; dentro de los diez minutos.

Sr. Bunge. — No, señor presidente; eso no corresponde a los diez minutos.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Si corresponde, señor diputado.

Sr. Secretario (Zambrano). — "Artículo 13. — El seguro nacional tiene por objeto: a) Como prestaciones ordinarias, las de los seguros de enfermedad, maternidad, invalidez y ancianidad; b) Como seguros especiales, los seguros de vida, contra la desocupación, viudez y orfandad, de pensiones complementarias y de prestaciones complementarias de los seguros de enfermedad y maternidad.

Sr. Bunge. — Dada la limitación que ha impuesto el señor presidente voy a dar la razón de ser de los demás artículos, dentro del tiempo reglamentario.

Propongo la implantación de los seguros de enfermedad, de maternidad, de invalidez y ancianidad.

Me consta que no hay un número considerable de empleados bancarios del sexo femenino...

Varios señores diputados. — Sí, hay.

Sr. Bunge. — Es el principio general que no haya, pero los habrá mañana, y si los hay ya es una razón más en favor del proyecto que sostengo.

La comisión en mayoría ha faltado a la promesa que contrajo con la cámara al discutirse la ley reglamentaria del trabajo de las mujeres y menores, cuando la diputación por Entre Ríos, bien inspirada y hasta con elo-

uencia, pidió que en la ley se introdujera la obligación por parte de los patrones de pagar un subsidio durante cierto tiempo, antes y después del parto.

La comisión se ha olvidado completamente del seguro de maternidad, que es de los más urgentes.

Sr. Anastasi. — Está contemplado en la orden del día 49.

Sr. Bunge. — Ruego que no se me interrumpa.

Pido el seguro de maternidad, implantado de inmediato, pagado por el estado. He cumplido con la promesa que contraí formalmente con la cámara, presentándole bases seriamente estudiadas. Propongo que el estado cargue en su integridad con el costo del seguro de maternidad, que tengo calculado, porque, como dije entonces, es la única manera de impedir que ese costo, que es elevado, recaiga sobre el salario de las obreras y determine que sean despedidas del trabajo.

Propongo el seguro de enfermedad, por dos razones que me parecen ambas igualmente decisivas: primero, porque todo trabajador, aun de los más robustos, está expuesto a contraer alguna enfermedad cada dos años y medio, durante tres semanas. Tal es el promedio de las estadísticas de enfermedad del seguro alemán y de las sociedades amigables inglesas. La enfermedad que se prolongue durante más de una quinceña crea una situación trágica para los trabajadores de poco salario. Sólo para los empleados de altos sueldos representa un riesgo insignificante. Por eso les es indiferente.

La otra razón es la necesidad de dar al seguro de rentas una subestructura descentralizada. Esa subestructura sólo puede formarse con las cajas locales de asistencia de los enfermos.

Por último está la razón de altísimo interés social de que solamente el seguro de enfermedad puede hacer eficaz al seguro de invalidez. Es la prevención de la invalidez por la asistencia oportuna y adecuada de todas las necesidades. Es la posible curación de la invalidez, una vez que aparece. me-

dante institutos adecuados de tratamiento, centralizados o descentralizados, según el caso.

En ese articulado preveo también, además del seguro de enfermedad y del seguro de maternidad, la asistencia en sanatorios y en hogares de ancianos. La mayoría de la comisión, siguiendo la triste huella de la ley nacional de jubilaciones, ¿cómo va a tener en cuenta los sanatorios y los hogares de ancianos, si los únicos que van a jubilarse, según ella, son los empleados de altos sueldos, porque en todo caso la "morralla" no le interesa? El hombre que toda su vida ha ganado un pequeño salario, el peón que no ha ganado más de 70 u 80 pesos mensuales va a jubilarse con una suma insignificante para vivir, si no tiene familia. Ese anciano inválido ¿qué asistencia va a poder costearse solo en una pieza de conventillo?

Es necesario proveer a la creación de los grandes hogares de ancianos. En mi proyecto están estudiados todos los recursos, porque una organización armónica, centralizada en la parte directiva y descentralizada en la aplicación, permite proveer, a un costo mucho menor, al establecimiento de estos beneficios.

Por mi proyecto, todos los servicios de los seguros están cubiertos con una contribución que llega, término medio, sólo al 13 por ciento de los salarios, y esto es así porque mi proyecto, aun cuando permite pagar pensiones de vejez, ya después de dos años, no está obsesionado por la jubilación a la más baja edad posible y con el más alto sueldo, y puede establecer la contribución del estado porque ella no será en favor de pocos sino de la población en masa. La mayoría exige la contribución permanente del trece por ciento de los salarios sólo para las jubilaciones. En el proyecto que sostengo se tendría derecho a pensión por invalidez de dos tercios del salario, ya después de seis años de contribuciones, y éste y los demás beneficios, gracias a la sobriedad con que han sido planeados, tienen bases sólidas.

Al crear cajas aisladas ocupadas solamente de las prestaciones en dinero, el despacho de la mayoría va en contra de la gran organización del seguro nacional, que acepta en principio, porque con estas pequeñas cajas corporativas aisladas se crean intereses particulares contrarios a la gran solidaridad de la cooperación de todos, sin la cual no puede hacerse efectivo el seguro nacional.

La cámara, pues, tiene para decidirse, por un lado las cajas antisociales de imprevisión y por el otro la gran previsión social organizada, constituyendo a toda la clase trabajadora en masa, heterogénea y caótica entre nosotros, en una verdadera "nación" consciente, que coopera en una obra inteligente.

Sr. Anastasi. — La comisión no acepta las enmiendas propuestas por el señor diputado Bunge. No doy más razones en obsequio a la brevedad. Por otra parte, esas enmiendas están contempladas en la orden del día 49.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 3º

Sr. Bunge. — Pido que se vote por separado la palabra "permanentes" que es excluyente en este caso; salvo que la comisión acepte que se suprima esa palabra.

Sr. Anastasi. — La comisión acepta la supresión.

Sr. Maidana. — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Se aprueba el artículo 3º con la modificación propuesta.

—Sin observación se aprueban los artículos 5º y 6º así como los incisos a) a f) inclusive del artículo 7º

—En discusión el inciso g).

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Propongo la substitución de este inciso por el artículo 29, inciso a) del apar-

tado 2º hasta 34 de mi despacho en minoría, páginas 619 a 621 de la orden del día.

En el articulado que propongo se deja de lado el sistema del descuento de un tanto por ciento fijo de los sueldos, reemplazándolo por el sistema racional vigente en todos los países del mundo civilizado, de la clasificación de los asegurados por categorías de sueldos y salarios y el registro de la contribución de los mismos y de sus empleadores en tarjetas personales, por medio de estampillas de cotización semanal.

En esa forma se hace una fiscalización automática enormemente simplificada, que permite a cada asegurado apreciar en cualquier momento los derechos que ha adquirido con su contribución.

El sistema del descuento del tanto por ciento del sueldo combinado con el descuento del primer sueldo y de los aumentos es una copia servil del régimen de la caja de jubilaciones y pensiones de empleados nacionales.

En la caja nacional, aunque es malo el sistema, puede aplicarse porque el estado fiscaliza directamente. En cambio, pretender aplicar este complicadísimo sistema en cajas particulares constituidas por empleados a sueldo de numerosas empresas, es de una imposibilidad absoluta. La caja ferroviaria, a pesar de comprender las empresas más centralizadas de la república, carece hoy todavía de informaciones exactas sobre el personal ferroviario. Hay unos 20.000 ferroviarios que han escapado al censo hecho en 1919. La caja de jubilación de los ferroviarios, a pesar de los numerosos medios de control que pone en su mano una ley mejor articulada que ésta y la ley orgánica de los ferrocarriles, no puede controlar si las empresas contribuyen efectivamente para todo ese personal no censado, como lo prescribe la ley.

La contabilidad de los descuentos es una cosa enormemente complicada.

Reclama la caja de jubilaciones ferroviarias una costosísima burocracia; y se explica: hay en realidad tantas categorías de sueldos como sueldos y

salarios; el salario de la mayor parte de los obreros, sobre todo el de los pagados por pieza, cambia de una semana a otra; y hay que anotar todos los aumentos de sueldos o las disminuciones de cada semana o de cada mes. Todo eso origina un gasto de tinta, de papel, de tiempo y de trabajo completamente inútil; semejante sistema no permitirá jamás controlar eficazmente las bases financieras de estas nuevas cajas, constituidas por personal disperso en numerosas empresas particulares. Esto condena a la caja, aunque en menor medida que a las otras que sostiene la comisión, al fracaso, porque el personal más numeroso y más mal pago, disperso en los pequeños pueblos de la república, no podrá gozar de los beneficios de la jubilación si no se organiza especialmente para conseguirlo.

Costará enormemente la administración de la caja con el empírico sistema de un tanto por ciento fijo de los sueldos, que determina cifras absolutas que varían para cada caso particular. Es un sistema que no existe en ningún país del mundo. También en esto tiene el honor de ser único el despacho de la comisión.

Si llegara a ser conocido de los especialistas en seguros sociales de Europa éste y los demás proyectos, no querrían creer en su realidad. Cuando estuvo aquí el profesor Alfred Manes, uno de los especialistas más eminentes en la materia, en una entrevista que tuve con él le describí las bases de nuestro sistema de jubilaciones, y me sonrió con expresión de incredulidad. Tuve que mostrarle el texto de la ley para que pudiera creer que se hacían descuentos uniformes en los sueldos, que se acordaban jubilaciones elevadas sin límites de edad o con edad reducida y que la administración de esas cajas era totalmente burocrática.

¿Cómo van a poder informarse cajas que deberán fiscalizar a miles de empresas dispersas cuando hoy todavía, después de veinte años, la propia caja de jubilaciones y pensiones civiles no sabe qué personal es el que con-

tribuye y tiene derecho a jubilación? No ha podido esa caja organizar aun la estadística completa del personal de empleados nacionales. ¡Qué no va a ocurrir con estas cajas particulares! Van a ser un desquicio y una mera apariencia.

Por más que la comisión haya aceptado la supresión del término "permanente" ello atenúa apenas, porque sólo lo atenúa en principio, el grave mal del sistema burdamente empírico de descuentos globales del tanto por ciento de los sueldos que no se pueden fiscalizar automáticamente.

Sólo puede ponerse término a toda posibilidad de error implantando el sistema probado por la experiencia en todos los países del mundo: las categorías de sueldos y de cotización, que las tengo rigurosamente calculadas en los artículos cuya substitución propongo. Se instituyen por ellos nueve categorías de salarios, de 3, 4, 5, 6, 6.50, etc., hasta más de 15 pesos diarios; se prevé luego, en el artículo 32, la cotización semanal que corresponde por cada categoría de salario para todos los seguros. Cada una de las nueve clases de cotización representa en el término medio del salario de cada categoría el 13 por ciento, como he dicho. La cotización fija asciende de 1,85 por semana en total para la categoría de salario más bajo, a 13,70 por semana para los más altos. De esas sumas está a cargo del asegurado la tercera parte, o sea de 4 por ciento en los salarios más bajos, y 4,6 por ciento en los más altos, contribución menor que la que propone la comisión; a cargo de los empleadores, del 8,3 por ciento hasta el 9,1 por ciento del promedio del salario de cada categoría, es decir una contribución apenas mayor que la que propone la comisión. Esas contribuciones fácil de fiscalizar y percibir por el sistema de las estampillas de seguro, sin el maremágnum de papeles y de chorros de tinta en que van a ahogarse las cajas que se prepara a sancionar la cámara.

Sr. Anastasi. — La comisión no acepta las enmiendas propuestas, señor presidente.

En cuanto a la referencia a los países civilizados, debo decir que el informe del diputado Grenda al parlamento francés, cuya referencia tengo en una revista de julio de 1923, prescinde de ese sistema fastidioso y complicado del señor diputado Bunge, y adopta en cambio el principio del 10 por ciento único de descuento: 5 por ciento patronal y 5 por ciento obrero.

En la ley inglesa de 1920 el artículo 18 faculta al ministerio para adoptar planes especiales. En el plan especial de los empleados de seguros se ha prescindido también de esa fastidiosa formalidad de la contribución semanal y del estampillado.

Sr. Bunge. — Pido la palabra para una breve rectificación.

El sistema sólo se explica en Francia, donde el retiro a la vejez es una institución exclusivamente burocrática y ha condenado al fracaso a la ley. Después de 12 años de vigencia la ley de retiros a la vejez sólo ha conseguido incorporar el 40 por ciento de los posibles asegurados.

El modelo que propone el señor diputado Anastasi, es pues, la mejor prueba del grave error que él sostiene. Un burocratismo que está ya abonado por la experiencia de 12 años, 12 años de fracaso.

Sr. Anastasi. — Mi estimado colega el señor diputado Bunge ha tomado en este caso el rábano por las hojas. Me he referido al informe Grenda, presentado a la cámara de diputados de Francia sobre el proyecto Millebrand, que no tiene nada que ver con el proyecto a que se refiere el señor diputado. Yo me he referido al último despacho.

—Después de unos momentos de espera:

Sr. Spinetto. — ¿Cuántos diputados hay en el recinto?

Sr. Secretario (González Bonorino). — 74 y en la casa 94.

—Después de unos momentos de espera para formar quórum:

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el artículo 7º, inciso g.

— Resulta afirmativa.

— En discusión el artículo 8º

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Considero un grave error que se declare a los fondos de la caja propiedad exclusiva de las personas comprendidas en la misma, porque eso podría ser interpretado en el sentido de que son propiedad individual de los contribuyentes a la caja, mientras que se trata de una propiedad social.

Creo que la comisión lo ha redactado en esa forma por inadvertencia y por mal precedente en que ha inspirado, de la caja nacional de jubilaciones. Allí se explica este artículo, que fué sin duda introducido en la ley para que no pudieran ser manoteados los fondos por algún decreto en acuerdo de ministros, como podría ocurrir.

Aquí carece de razón de ser porque lo que se quiere expresar es que son propiedad de la entidad, y por eso, en el artículo 34 del despacho en minoría, que me permitirá leer, para demostrar que se trata...

Sr. Rodríguez (J. R.) — Estamos en la discusión en particular.

Sr. Bunge. — Deseo continuar sosteniendo el punto de vista general, aprovechando en cada caso los minutos que acuerda la resolución de la mayoría, y este punto de vista general lo encuadro en la disposición reglamentaria en cada caso particular.

En el artículo 34 de mi despacho se dice

El importe de las cotizaciones y contribuciones de los asegurados pertenece a la caja social en que coticen, excepto la parte que corresponda deducir para las reservas generales, y las transferencias a que hubiere lugar por cambios de inscripción.

Las cotizaciones del estado forman los fondos nacionales de maternidad y de pensiones, que aseguran las prestaciones de maternidad y las pensiones básicas.

El despacho de la comisión no prevé que por el carácter que debe tener la caja, de persona jurídica de pleno derecho, corresponde imponer a los dirigentes de la caja una responsabilidad especial.

Sr. Anastasi. — Eso está dicho en otra parte, señor diputado.

Sr. Bunge. — Esa responsabilidad se prevé en el artículo 9º de mi despacho, que propongo a la comisión acepte se agregue, modificando su redacción en la forma adecuada al caso.

Ruego al señor secretario se sirva leer el artículo 9º de mi despacho, página 614.

—Se lee:

Art. 9º—El cargo de director o representante del seguro nacional en alguna de sus entidades, es carga pública; sólo exime de ella la inhabilidad física o moral probada, o su desempeño ininterrumpido durante un período.

Los miembros de los directorios y comisiones son solidariamente responsables, excepto cuando dejen constancia en acta de su protesta y comuniquen a la autoridad de inspección o al ministerio público el hecho que la motiva.

Los funcionarios del seguro nacional, sean representantes o empleados de su administración, son responsables como empleados públicos.

Sr. Bunge. — Habría que suprimir “representantes del seguro nacional” poniendo simplemente “representantes de la caja de tal”. Luego donde dice: “los miembros de los directorios o comisiones” debería suprimirse lo último, y donde dice “funcionarios del seguro nacional” debe decir: “los funcionarios de la caja”.

Sr. Anastasi. — El propósito que se ha tenido es que los fondos sean de propiedad de la caja; se afectan para un fin especial, algo así como una fundación. Para disipar las dudas, la comisión aceptaría esta forma: “los fondos y rentas que se obtengan por esta ley serán de exclusiva propiedad de la caja”. Y seguiría después la misma redacción.

Sr. Correa (F. E.). — Creo que esta declaración del dominio de la caja so-

bre los fondos es puramente doctrinaria y muy peligrosa; debe ser suprimida, porque con ello no se perjudicará en nada la economía de la ley.

Sr. Bunge. — Ruego la lectura del artículo 8º que, junto con el 9º reemplazaría con ventaja, a mi entender, el 8º del despacho de la comisión por las razones dadas.

Sr. Correa (F. E.). — Voy a proponer el texto enmendado: “Con los fondos y rentas que se obtengan por esta ley se atenderán el pago de los beneficios que se otorguen por la caja y los gastos que origine la administración de la misma”, sin declaración ninguna sobre el dominio.

Sr. Anastasi. — Ambas fórmulas expresan la misma idea; si la cámara no tiene inconveniente, la comisión tampoco tiene ninguno en aceptar la fórmula propuesta por el señor diputado por Santa Fe. Lo que la comisión quiere es que los fondos sean afectados a un fin determinado bajo la responsabilidad personal de los directores.

Sr. Bunge. — En substitución del segundo párrafo propongo como artículo nuevo el noveno de que se ha dado lectura.

Sr. Anastasi. — La comisión no acepta; envuelve otros conceptos.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el despacho de la comisión con la modificación propuesta por el señor diputado por Santa Fe, que ha sido aceptada.

—Se aprueba.

—En discusión el artículo 9º.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Pido la palabra.

He depositado en secretaría la nueva redacción que propongo, en substitución del despacho de la comisión, para el artículo 9º, que contiene seguramente las mismas ideas y responde a los mismos propósitos que la comisión tuviera en vista, pero que me parece que los define mejor y con más claridad. Se hace imperativo, por la nueva redacción que propongo — y que pido se lea por secretaría oportunamente—que

el 50 por ciento de los fondos de la caja se coloque en títulos de renta nacionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la nación, y el restante 50 por ciento se invierta en préstamos hipotecarios a los empleados comprendidos en los beneficios de esa ley. Si se mantuviera la redacción del despacho de la comisión podría ocurrir, por una inconveniente interpretación del directorio, que se cumpliera la ley prestando para adquisición o construcción de viviendas a los empleados solamente el 2 por ciento de los fondos depositados, y sin duda alguna lo que la comisión ha querido es que se llegue al límite de 50 por ciento a que se hace referencia, para prestar efectivamente el beneficio del hogar propio a los empleados que comprende la ley.

Sr. Anastasi. — Ese es el concepto que ha tenido la comisión, de manera que si la redacción propuesta consulta ese propósito no habría inconveniente en aceptarla.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a dar lectura de la redacción propuesta por el señor diputado por Santa Fe en substitución del artículo 9º del despacho.

—Se lee:

‘El 50 por ciento de los fondos de la caja se colocará en títulos de renta nacionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la nación, y el otro 50 por ciento en préstamos hipotecarios a los empleados comprendidos en los beneficios de esta institución con destino exclusivo a la adquisición o construcción de sus viviendas y de acuerdo con el reglamento que deberá dictar el directorio, aprobado por el poder ejecutivo’.

Sr. Anastasi. — La comisión pediría que el señor diputado aceptara una pequeña modificación que se sugiere, y es no dar el carácter imperativo, porque está entendido que el directorio, formado por los mismos empleados y por los representantes de los bancos, ha de hacer uso de esa facultad siempre que por una razón u otra no haya una oportunidad de colocación mejor en los capitales para el mismo personal.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Podría agregarse, entonces, al principio del artículo propuesto la palabra “hasta”.

Sr. Anastasi. — Perfectamente.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Propongo, en substitución de los dos artículos que se han presentado, el artículo 61 de mi despacho en minoría, que establece el principio de la “obligación” de colocar el 50 por ciento de los fondos en préstamos hipotecarios a cooperativas de construcción, formadas por asegurados, o a los asegurados individualmente, siempre que haya oportunidad para esa capitalización.

Ese principio de destinar obligatoriamente una proporción dada al fin más importante de construcción de viviendas, que ahora me felicito acaba de sostener el señor diputado por Santa Fe y que está sosteniendo en el proyecto socialista de seguro nacional desde el año 1917, lo sostiene este artículo 61 en forma más elástica y comprensiva que la propuesta por dicho señor diputado.

Ese artículo dice:

“El fondo nacional de pensiones y las reservas compensadoras (en este caso sería el fondo de la caja) excepto las sumas requeridas por los gastos corrientes y una reserva prudencial de fácil liquidación para imprevisos, se capitalizarán a un interés medio no inferior al interés real de los títulos de crédito público, en la siguiente forma:

- a) El veinticinco por ciento, por lo menos, en títulos de crédito público o que gozan de la garantía de la nación;
- b) El cincuenta por ciento, obligatoriamente siempre que haya oportunidades de capitalización en esta forma: en préstamos hipotecarios con suficiente garantía a municipios o a cooperativas (aquí se establece para municipios desde el momento que una gran organización homogénea acumularía inmensos capitales en pocos años, cosa que no puede hacer una pequeña cajita aislada), para la construcción en gran escala de casas individuales o colectivas de un costo

máximo de ocho mil pesos por vivienda familiar completa, o bien en cualesquiera otras obras de utilidad social que favorezcan en grado mensurable la salud de la población laboriosa”.

La simple lectura de estos incisos demuestra la preocupación consciente que ha orientado el articulado de la disidencia socialista, de utilizar los fondos constituidos por los asegurados en beneficio de los mismos para creación de obras sociales que realicen la función más excelsa de la previsión colectiva, que es la prevención de la enfermedad y el mejoramiento del bienestar biológico y moral. Entre nosotros, el primer factor de profilaxis y de levantamiento de las condiciones de vida en todos sus aspectos es la reforma de la vivienda.

Por eso es que desde 1917 hemos sostenido que obligatoriamente debe dedicarse a construcciones de viviendas económicas e higiénicas por lo menos el 50 por ciento de los fondos destinados a previsión social.

Para que esas construcciones sean de máxima utilidad social es necesario que se trate con preferencia de préstamos en gran escala, porque sólo éstos pueden realizar verdadera obra de reforma levantando barrios enteros. Los pequeños préstamos individuales, ubicados en cualquier sitio, aunque sea en barrios de tugurios, pueden no realizar esa función; dispersan una fuerza enorme con resultado aleatorio, porque no contribuyen a mejorar las condiciones sanitarias, de conjunto, las condiciones estéticas y la comodidad para una masa digna de mención.

Luego dice el inciso c) de este artículo que propongo en substitución:

- c) El remanente puede ser capitalizado en préstamos hipotecarios y asegurados o a cooperativas constituidas por asegurados, para la construcción de casas individuales o colectivas, y en la construcción de edificios para uso de las entidades del seguro nacional.

Prevé, pues, también la construcción de otros edificios de índole social, que es también un objeto a que debería tender esta ley.

Las sanciones ya existentes, como el “hogar ferroviario”, por ejemplo, el artículo en la ley de jubilación de los tranviarios y telefonistas y el artículo actual de la comisión, se inspiran en el proyecto socialista, pero no ha comprendido el propósito principal de ese proyecto, que es la fecunda concepción confirmada por la experiencia en Inglaterra, Bélgica y Alemania, de la reforma radical de la habitación en gran escala.

Nada más.

Sr. Anastasi. — La comisión no acepta la enmienda propuesta por el señor diputado por la capital doctor Bunge. Entiendo que sus propósitos están contemplados en el artículo actual. Por lo demás, al sancionarse la ley orgánica se pueden tener en vista. El punto interesante que se refiere a los préstamos a cooperativas, entiendo de la comisión que está implícitamente comprendido, también, dentro de este artículo 9º, desde que nada les impediría a los afiliados de la caja formar cooperativas para construcción de casas.

Sr. Bunge. — Entonces podría hacerse un agregado aclaratorio después de donde dice “empleados”: “sea individualmente o asociados en cooperativas”.

Sr. Anastasi. — No hay inconveniente.

Sr. Rodríguez (J. R.). — La comisión aceptó la redacción que yo propuse para el artículo 9º; a ese texto puede hacerse el agregado del doctor Bunge.

Sr. Sánchez Elia. — A mí me parece que no está clara la redacción de este artículo, porque entiendo que el objeto era este: que los fondos de la caja se invirtieran en títulos nacionales el 50 por ciento, y hasta el otro 50 por ciento en préstamos hipotecarios.

Sr. Rodríguez (J. R.). — No, señor diputado; precisamente esa es la observación que se hizo para pedir la

reforma del artículo de la comisión: si se dijera "hasta el 50 por ciento para préstamos de adquisición o construcción de viviendas", ya dije hace un momento que el directorio cumpliría con la ley destinando el 2 por ciento de esos fondos para edificación, frustrando evidentemente el propósito principal de este artículo.

En cuanto al otro aspecto de la observación del señor diputado por Buenos Aires, es una cuestión de simple buena administración. Es evidente que mientras la caja no preste íntegramente el 50 por ciento para edificación que yo pido se exprese en forma imperativa, ha de dar a los fondos que tenga disponibles para ese objeto la inversión más reproductiva, ya sea en títulos de renta o en depósitos bancarios que devenguen un interés conveniente.

Con esta aclaración puede estar tranquilo el señor diputado.

Sr. Sánchez Elía — Muy bien.

Sr. Correa (F. E.). — Pido la palabra.

Si no he entendido mal, me parece que la aclaración hecha por el señor diputado por Santa Fe es para conformar el texto de la ley tal como está. En definitiva, a lo que hay que tender es a la colocación de capitales de una manera productiva. Si es obligatoria la inversión de 50 por ciento de los fondos colocados en préstamos hipotecarios, si no hay demanda, ¿qué se va a hacer?

Por eso entiendo que es preferible dejar el texto tal como está, con facultad de colocar hasta el 50 por ciento.

Sr. Anastasi. — Podría leerse el artículo.

—Se lee:

"Hasta el 50 por ciento de los fondos de la caja se colocarán en títulos de rentas nacionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la nación; y el otro 50 por ciento en préstamos hipotecarios a los empleados comprendidos en los beneficios de esta institución, sea individualmente o asociados en cooperativas, con destino exclusivo a la ad-

quisición o construcción de sus viviendas y de acuerdo con el reglamento que deberá dictar el directorio, aprobado por el poder ejecutivo".

Sr. Correa (F. E.). — ¿Y si no hay demanda aceptable de préstamos hipotecarios?

Sr. Rodríguez (J. R.). — Es indudable que si no hubiese demanda de préstamos para edificación, el directorio no podrá acordarlos. Pero es una situación que nunca se producirá, porque los empleados de banco usarán inmediatamente de ese precioso derecho, y tratarán de tener en el menor plazo posible su casa propia. Podría aclararse, sin embargo, aún más el concepto de estas disposiciones, autorizando la inversión en títulos de los fondos que no estén afectados aún a adquisición o edificación de vivienda, provisoriamente.

Sr. Secretario (Zambrano). — El artículo 9º del despacho dice:

Art. 9º — Los fondos de la caja se colocarán en títulos de renta nacionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la nación, quedando facultado el director o para destinar hasta el cincuenta por ciento de estos fondos en préstamos hipotecarios a sus empleados, con destino a la adquisición o construcción de viviendas, en la forma que determine la reglamentación.

Sr. Anastasi. — Creo que con el agregado del señor diputado Bunge se satisfarían todas las aspiraciones.

Sr. Rodríguez (J. R.). — No; porque queda siempre en pie la observación que he formulado. Si el directorio — con la redacción de este despacho — no quiere prestar para viviendas más del dos por ciento de los fondos de la caja, la ley no lo obligaría. En cambio, con la redacción que yo propongo, es bien claro el derecho de los empleados bancarios para tomar el 50 por ciento con esos fines. Para hacer algo útil y eficaz, debe ser imperativo.

Sr. Bunge. — Debe ser obligatorio...

Sr. Rodríguez (J. R.). — Debe ser obligatorio, fuera de duda, para asegurar el beneficio de la vivienda propia que la cámara quiere establecer a favor de los empleados de banco.

Sr. Bunge. — Debe ser obligatorio, mientras haya la posibilidad de esa colocación.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Desde luego. La redacción mía que la comisión había aceptado, es clara; pero puede ser completamentada aun con un párrafo que prevea la colocación provisoria de los fondos destinados a construcciones, mientras no haya solicitudes por el total y estableciendo que pueden ser adquiridas con ellos cédulas o títulos de la nación.

Sr. Costanti. — Me parece que el artículo como está, es claro y no debe modificarse. Lo único que podría hacerse — que ya está, por lo demás — es la aclaración de que el 50 por ciento podrá colocarse en créditos hipotecarios para viviendas; y si no hay esa posibilidad queda autorizado el directorio para invertirlo en títulos.

Sr. Ferreyra. — Estamos haciendo una discusión inútil. El artículo está bastante bien.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — ¿La comisión acepta la fórmula del señor diputado. Rodríguez?

Sr. Anastasi. — Ya la había aceptado.

Sr. Secretario (Zambrano). — La fórmula aceptada por la comisión: “Hasta el 50 por ciento de los fondos de la caja se colocarán en títulos de rentas nacionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la nación; y el otro 50 por ciento en préstamos hipotecarios a los empleados comprendidos en los beneficios de esta institución sea individualmente o asociados en cooperativas, con destino exclusivo a la adquisición o construcción de sus viviendas y de acuerdo con el reglamento que deberá dictar el directorio aprobado por el poder ejecutivo. Mientras hubiere fondos disponibles, por falta de solicitudes de préstamos hipotecarios, podrán invertirse provi-

soriamente en los títulos de renta a que se ha hecho referencia”.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Correa (F. E.). — Que se rectifique.

Sr. Ferreyra. — Primero debe votarse el artículo de la comisión.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La comisión ha aceptado.

Sr. Ferreyra. — ¿Cómo va a aceptar si no se ha reunido?

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Para la presidencia la declaración del presidente de la comisión tiene ese alcance.

Sr. Correa (J. A.). — He pedido rectificación de la votación.

—Rectificada la votación, resulta nuevamente afirmativa.

—En discusión el artículo 10.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Este artículo, creo que por inadvertencia de la comisión, establece otro principio antisocial, en cuanto prohíbe de hecho a los bancos eximir a sus empleados de la obligación de dejarse descontar el 5 por ciento del sueldo.

El artículo debería establecer únicamente la obligación de los empleados de dejarse descontar el cinco por ciento si la empresa así lo requiere; debería establecer que los bancos “pueden” hacer el descuento, pero no imponerles la obligación.

Sr. Amuchástegui. — La obligación está impuesta antes.

Sr. Bunge. — Debe permitirse que alguna empresa bancaria moderna, con vistas más avanzadas, obsequie, a sus empleados de bajos sueldos con el importe de ese cinco por ciento. El despacho de la comisión impide hacerlo. Por esto creo que debería decir: “Los bancos deberán abonar mensualmente el importe de las sumas a que se refieren los incisos tales y cuales del artículo..., con derecho a descontar el

cinco por ciento de los sueldos a que se refiere el inciso a)''.

Sr. Anastasi. — La comisión mantiene su despacho.

—Se vota y aprueba el artículo 10 del despacho.

—En discusión el artículo 11.

Sr. Trucco. — Pido la palabra.

La lectura de este artículo me sugiere una duda que quisiera que la comisión me aclarara. Yo desearía saber si los empleados de instituciones que no tienen el título de bancos pero que hacen operaciones de crédito, tales como las cajas nacionales e internacionales de jubilaciones, y que, en consecuencia, realizan una acción directa como bancos, están también comprendidos en los beneficios del proyecto que estamos discutiendo.

Sr. Anastasi. — El despacho se refiere a las empresas bancarias. Quedará librada a la reglamentación la delimitación precisa de cuáles son esas empresas bancarias.

La comisión ha preferido no entrar en estos detalles.

Sr. Trucco. — Quería esa aclaración que sería siempre en beneficio de los empleados que están trabajando en instituciones bancarias y que sin ella tal vez quedarían excluidos de la ley.

Sr. Correa (F. E.). — Hay tanta variedad de bancos, aunque generalmente consideremos como tales a los de descuento, que convendría una aclaración al respecto.

Sr. Anastasi. — Las empresas a que se refiere el señor diputado, en mi entender, son bancarias. Pero, como he dicho, la ley no puede entrar en detalle, lo que debe subordinarse a la reglamentación. Los que no son empleados bancarios entrarán dentro del régimen de la orden del día número 50.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

La misma duda que formula el señor diputado por la capital se planteó en la comisión. Sostuve la necesidad de definir lo que debía entenderse por empresa bancaria y propuse una defi-

nición de la misma que consideré bastante precisa y que la comisión aceptó en un principio, incorporándola al artículo 2º, me parece, de su despacho. Pero luego se arrepintió de haber aceptado siquiera esa proposición de un diputado socialista y reconsideró su resolución, suprimiendo la definición.

Sr. Anastasi. — Eso se discutió al tratarse el artículo 1º.

Sr. Bunge. — No puedo ahora ser más papista que el papa; no tengo en la memoria la definición que propuse y no puedo improvisarla.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el artículo 11.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 12.

Sr. Secretario (Zambrano). — El señor diputado Jorge Raúl Rodríguez ha observado el final de este artículo.

Sr. Bunge. — Yo lo observo también.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Es preferible que se lea para proceder con orden.

Sr. Bunge. — Con orden se procederá tomando en cuenta en primer término las proposiciones de la minoría de la comisión en cumplimiento del reglamento.

Propongo que la comisión acepte como agregado al apartado 3º de este artículo el siguiente: "Queda prohibida toda intervención de las empresas o agentes de las mismas en los trámites electorales". Y que en el apartado 4º donde dice: "Con la intervención de la inspección de justicia" diga: "con intervención del departamento nacional del trabajo".

La razón de ser del agregado es la siguiente: este artículo, con pequeñas modificaciones de detalle, ha sido tomado de un artículo de mi proyecto de ley de iniciación del seguro nacional. Lo aceptó la comisión, y me place dejar constancia que lo hizo sin discusión.

En el artículo original que ha copiado la comisión para su despacho no figura la exclusión de las empresas en

los trámites electorales, por una razón muy sencilla: por ser un despacho largamente meditado, he podido evitar todas las repeticiones. No lo establecí porque en el final figura un artículo que establece penas muy severas para las empresas que directamente o por intermedio de agentes ejerzan presión sobre el personal en los trámites electorales, penalidad que he establecido, en principio, por la experiencia de la elección realizada en la caja de jubilación del personal de las empresas privadas, en que la compañía telefónica hizo la más indecente política criolla apoderándose de las libretas de votos de las empleadas mujeres para obligarlas a aceptar el candidato patronal, sendo representante obrero, señor Festal, que ha resultado electo bajo ese sistema de fraude y de presión.

Para evitar que se reproduzcan casos como éste, aunque en los bancarios es menos probable, propongo a la comisión, ya que no establece penalidad alguna en su despacho, que siquiera se prohíba la intervención en la forma que he indicado.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Deseo que el señor secretario dé lectura al agregado del final del párrafo tercero que he propuesto.

Sr. Secretario (Zambrano). — Al final del párrafo tercero el señor diputado por Santa Fe propone lo siguiente: “y cada delegado tendrá en la asamblea un número de votos igual al de sus representados”.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Entiendo que es eso lo que ha querido manifestar la comisión en su despacho, porque sería evidentemente injusto que un delegado que representara un padrón de mil electores y que hubiese sido electo por cincuenta votos tuviera sólo esos cincuenta votos en la asamblea, y otro que representara un padrón de cien, de los que hubieran votado ochenta, tuviera treinta votos más que el anterior. Debe tenerse en cuenta que de lo que se trata en este caso es de constituir una asamblea de electores calificados de segundo grado, pero cuyos componentes representen exactamente al

cuerpo electoral originario. Es decir, a la totalidad de los miembros de la caja; a todos los empleados bancarios asociados.

Sr. Bunge. — Deseo hacer una aclaración, porque precisamente yo he propuesto ese sistema.

Creo que esta es una representación funcional; no se representa a una masa mayor o menor de contribuyentes inertes. Los únicos que deben estar representados son los que ejercen efectivamente la función que les impone la caja.

Puede ocurrir esta enormidad con el sistema que propone el señor diputado por Santa Fe: que una sección con dos mil socios inertes, carentes de conciencia social, de los cuales sólo votan cien, grave con el peso muerto de sus dos mil votos inexistentes en el congreso elector, y en cambio, una sección de quinientos asociados activos, inteligentes, con plena conciencia social, de los que votan el 80 por ciento, es decir 400, pese cuatro veces menos. Lo justo es que cada delegado pese exactamente con los votos que lo han elegido, porque son esos únicamente los que deben contar en este caso; no se trata de representaciones geográficas, como la de los distritos políticos; se trata de representación de voluntades, de propósitos, de ideas definidas, que sólo pueden medirse por el número de votos emitidos en favor del candidato que representa esos propósitos y esas ideas.

Sr. Rodríguez (J. R.). — El señor diputado, que pareciera que tiene razón analizando superficialmente sus argumentos, incurre en una verdadera violación de los más elementales principios democráticos.

Sr. Bunge. — Para las elecciones políticas.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Para todas las elecciones, porque la creación de este cuerpo intermedio entre el electorado de empleados bancarios y el consejo de la caja solamente se realiza en este caso en virtud de inconvenientes de orden geográfico, por la dispersión de los electores. Suponga el señor di-

putado Bunge que esos electores no estuvieran dispersos y congregate en una sola asamblea nacional a todos los bancarios que tengan derecho a elegir sus delegados ante el consejo de la caja, y entonces el señor diputado no habría pensado siquiera que pudiera ser eliminado en ningún momento cualquiera de los afiliados, de los miembros de la caja del padrón electoral y privado del derecho de influir en las designaciones.

Sr. Bunge. — Si me permite el señor diputado...

Sr. Rodríguez (J. R.). — No, señor diputado. El señor diputado habla treinta veces en cada artículo. Escuche los dos minutos que voy a hablar.

Creo que tratándose de una elección de segundo grado lo que tiene que constituir este grupo de electores calificados es la representación total de los miembros que contribuyen con sus aportes al sostenimiento de la caja. Claro que yo desearía que todos los afiliados a la caja, los miembros de ella, participaran en las distintas elecciones; pero esa es una cuestión de reglamentación de la ley. Lo esencial es el derecho de estar representados en la asamblea intermedia que tienen todos y cada uno de los contribuyentes en la caja. No es posible que a título de que haya dejado de participar en una elección primaria, o lo haya hecho por un candidato distinto al elegido, sea eliminado su derecho fundamental de tener alguna representación en la asamblea intermedia.

Por eso pido a la comisión manifieste si acepta o no el agregado que he propuesto.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

El argumento que ha hecho el señor diputado por Santa Fe, invocando la asamblea de todos los afiliados, que sería posible si se tratara de una caja concentrada en una localidad, demuestra que la única forma de hacer efectiva la asamblea en elecciones descentralizadas es la del despacho de la comisión.

¿Quiénes son los que votan en la asamblea, los que van a resultar representados, los que cuentan como socios

en las entidades sociales dirigidas por la asamblea? Los que se toman el trabajo de concurrir a la asamblea y votar: únicamente ellos.

Ocurre entre nosotros el caso de sociedades de socorros mutuos con 5.000 y hasta 10.000 socios a cuyas asambleas no concurren sino 100 o 200; estos 100 o 200 son los que eligen a los miembros del directorio. Precisamente ese principio de la asamblea sólo puede ser aplicado en este caso de una organización dispersa en un vasto territorio computando únicamente los votos efectivamente emitidos.

Es precisamente pensando en la asamblea social que el diputado que habla y la comisión han aceptado esa forma.

Sr. Míguez. — Pido la palabra.

Para apoyar decididamente la proposición del señor diputado Rodríguez y agregar un argumento que no ha sido tenido en cuenta por el señor diputado Bunge.

Puede existir el personal de un banco, perfectamente activo, que no coincida en un candidato determinado; se forman tres o cuatro listas y una de ellas triunfa: ¿en qué condiciones quedaría ese candidato triunfante cuando todos los empleados del banco han concurrido a la elección activamente, se han disputado el triunfo y él ha resultado consagrado por un mayor número de votos?

Por esta consideración creo que corresponde votar el artículo tal cual lo propone el señor diputado Rodríguez.

Sr. Bunge. — Precisamente este sistema admite la proporcionalidad. El número de delegados será proporcional; la caja puede establecer la representación proporcional.

Sr. Anastasi. — La comisión, por las razones expuestas por los señores diputados por Santa Fe y por Buenos Aires, acepta la proposición del señor diputado por Santa Fe.

De la proposición del señor diputado por la capital acepta lo que se refiere a la no ingerencia patronal.

Sr. Amuchástegui. — Deseamos saber si la comisión ha aceptado la su-

presión de la intervención de la inspección general de justicia.

Sr. Anastasi. — No, señor diputado.

Sr. Amuchástegui. — La inspección general de justicia no tiene nada que ver con estas instituciones; con el departamento nacional del trabajo basta.

Sr. López Anaut. — Pero para la parte legal...

Sr. Anastasi. — Se trata de asambleas de instituciones en que hay que llenar formas legales.

Sr. Secretario (Zambrano). — A renglón seguido del apartado tercero del despacho de la comisión, ésta acepta el agregado del señor diputado Rodríguez (J. R.): “Cada delegado tendrá en la asamblea un número de votos igual al de sus representados”.

Inmediatamente después entraría el agregado del señor diputado Bunge que dice: “Queda prohibida toda intervención de las empresas o agentes de las mismas en los trámites electorales”.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Zambrano).—El resto del artículo quedaría como está.

Sr. Bunge. — Voy a pedir que se voten por separado las palabras “inspección de justicia”. Me parece que eso es un quinta rueda, una traba.

Sr. Pinto. — Podría votarse primero hasta las palabras “departamento nacional del trabajo”.

Sr. Amuchástegui. — Yo quiero insistir sobre este punto, porque es necesario que eliminemos definitivamente a la inspección de justicia de estas leyes y dejemos al departamento nacional del trabajo la exclusividad del control y dirección de las operaciones electorales en esta clase de instituciones. La inspección general de justicia nada tiene que ver aquí; es un organismo creado para las sociedades anónimas y para otra clase de sociedades en el país.

Precisamente una de las grandes dificultades que se han notado en el país respecto de estas instituciones es el control y fiscalización de la inspección general de justicia, cuya inge-

rencia en materia de sociedades se discute y se niega en casi todas las legislaturas del mundo. Somos uno de los pocos países que ha quedado todavía con la fiscalización de las sociedades por medio de la inspección de justicia. Yo me he opuesto, y hasta tengo un proyecto de ley presentado dando al departamento nacional del trabajo la exclusividad del control y de la dirección en esta clase de operaciones.

Además, la comisión incurre aquí en un error evidente. Dice: “presidirá la primera elección por intermedio del departamento nacional del trabajo y de la inspección general de justicia”. ¿Quién preside? ¿El departamento o la inspección?

Debe dejarse exclusivamente — y debe adoptarse como un criterio general para todas las leyes que se refieren al trabajo y a esta clase de jubilaciones, — que lo sea el departamento nacional del trabajo.

En este sentido llamo la atención de los señores diputados, a fin de que uniformemos el criterio y adoptemos de una vez este sistema.

Sr. Pinto. — Convendría votar por partes.

Sr. López Anaut.—Convendría que el señor diputado demostrara qué inconveniente hay para que intervenga la inspección de justicia.

Sr. Amuchástegui. — Hasta para la fiscalización de las sociedades anónimas somos uno de los cinco o seis países en el mundo que tenemos la inspección de justicia para esa clase de fiscalización. Solamente Austria, Rumania y creo que el Brasil, el Uruguay y la Argentina son los países que tienen este sistema. Ya se ha dejado eso de lado.

Por otra parte, es necesario no fiscalizar por medio de la inspección general de justicia estas cajas de jubilaciones y pensiones, absolutamente extrañas a la inspección general de justicia, que tiene otras finalidades y otros propósitos.

No deseo ser extenso; podría demostrar hasta el exceso la inutilidad

de este procedimiento, pero los señores diputados me piden que hable sintéticamente.

Esta clase de leyes deben dar intervención únicamente al departamento nacional del trabajo.

—Se hace cargo de la presidencia el señor vicepresidente, don Alberto H. Carosini.

Sr. Mora y Araujo. — Voy a votar de acuerdo con la proposición del señor diputado por la capital porque entiendo que en instituciones de esta naturaleza no tiene nada que hacer la inspección de justicia, que les es completamente extraña, y las funciones de contralor que se van buscando son llenadas suficientemente por el departamento nacional del trabajo.

Sr. Presidente (Carosini). — Se va a votar por partes.

—Se vota por partes, y es aceptado íntegramente el artículo en la forma propuesta por la comisión.

—Sin discusión se aprueba el artículo 13.

—En discusión el artículo 14.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Tendría en realidad que observar todo este artículo de acuerdo con el despacho en disidencia; pero propongo a la comisión un agregado que podría salvar en parte el inconveniente de las cajas sin asamblea social que ella propone, si hubiere una asamblea, ella podría elegir y revocar el mandato de los miembros del directorio, tanto los representantes de los asegurados como los de las empresas: no habiéndola, se instituye una dictadura por tiempo fijo de tres años con mandatarios irresponsables, que, aunque falten a los compromisos que contraigan con sus electores — y les puede ser más fácil faltar de acuerdo con la enmienda aceptada al artículo 12 — pueden constituir una oligarquía dándose representación a entidades numerosas que no votan. La manera, entonces, de atenuar esta situación es hacer re-

vocables los mandatos; propongo que el primer apartado diga: “El mandato de los representantes durará tres años, pero son revocables por nueva elección pedida por sus respectivos mandantes (sean los empleadores, sean los afiliados a la caja) en número no inferior al quinto de los votos emitidos en su favor”. Es decir, que si un quinto de los votos representados pide nueva elección para ver si deben ser revocados los mandatos, deberá convocarse esa elección.

Sr. Anastasi — La comisión no puede aceptar la enmienda. Se refiere a lo que se llama la revocación de los funcionarios, pero eso se puede estudiar en la ley orgánica.

Sr. Bunge. — Observo todos los demás artículos, pero no tengo más que agregar a los conceptos de fondo que deseaba exponer.

Sr. Presidente (Carosini). — Se va a votar.

—Se aprueba el artículo en discusión, aprobándose igualmente los artículos 15 y 16.

—En discusión el artículo 17.

Sr. Secretario (Zambrano). — En substitución de este artículo, el señor diputado don Jorge Raúl Rodríguez, propone el siguiente: “El directorio, con sus propios medios y dentro del primer año de su funcionamiento levantará el censo de los empleados y proyectará el plan de las prestaciones que puedan acordárseles, sobre la base de los recursos creados por la ley, plan que será sometido a la aprobación del congreso por medio del poder ejecutivo para dictarse la ley orgánica de la caja”.

Sr. Rodríguez (J. R.)—Pido la palabra.

El artículo que propongo tiene algunas diferencias substanciales con el artículo 17 de la comisión.

En primer término, proyecto la supresión de los pseudo-titulados actuarios, considerando que tratándose de un personal como el bancario, especializado en el manejo de los números, en

ninguna caja como ésta los llamados actuarios son absolutamente innecesarios.

En segundo lugar, se abrevia de dos años a uno el término en que el directorio debe hacer el censo de los empleados y el proyecto de las prestaciones; y se suprime el último párrafo porque se considera innecesario, estando ya legislado en el artículo 4º. Pero insisto en que mi principal propósito es hacer que se suprima en la ley la referencia a los actuarios, que no siendo un título expedido por instituciones oficiales, no deben imponerse y reconocerse en esta forma.

La tarea que se les encomienda en el despacho, puede ser hecha por muchos de nuestros diplomados en las facultades de ciencias económicas y por todos los que dominen con cierta amplitud las matemáticas y los estudios de seguros, que son muchos. No hay por qué crear esos funcionarios sin título, como insubstituibles.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Este es uno de los pocos artículos buenos del despacho de la comisión, porque está inspirado en un concepto serio de lo que debe ser una entidad de seguros, y por eso me temo mucho que la cámara no lo vote.

Es realmente extraordinario que se pretenda eliminar la intervención de los especialistas en materia de matemática de seguros para velar por los recursos de una caja de jubilaciones, sobre todo una caja que, con los antecedentes que se funda en bancarrota de antemano.

Sr. Rodríguez (J. R.). — En materia de números y cálculos ¿quién es especialista? ¿Qué más especialistas que los bancarios?

Sr. Bunge. — Esa es la confusión. La supresión de los actuarios significa cegar a la caja, prohibirle que se dote de ojos. En vez de la gente que suma el porvenir, sólo podrán estudiarlo las gentes que restan el presente. Los bancarios son duchos en ciertas operaciones de números, consistentes en las de adición de intereses en favor del banco y de resta de los intereses en contra de sus deudores.

Esa es la contabilidad vulgar. Las operaciones matemáticas comerciales bancarias no tienen nada que ver con la compleja matemática del seguro. Un banquero, por el solo hecho de ser tal, no tiene competencia en materia de organización de cajas de rentas. Sólo la tendría si fuera accidentalmente actuario profesional. Excluir la avaluación actuarial, que pueden hacerla los representantes mismos del directorio o empleados de la caja que sean actuarios, importa excluir los cálculos serios y honestos; se haría posible de inmediato el saqueo de la caja en favor de los empleados con muchos años de servicios y sin contribución alguna, a quienes se acordaría, hasta agotar los fondos, jubilaciones altas con un bajo límite de edad.

Para evitar la ruina de la caja, para que los empleados bancarios de todo el país sepan lo que pueden conseguir realmente con los recursos que se crean, es indispensable la valuación actuarial. Es esto tan elemental que me extrañaría la indicación del señor diputado por Santa Fe, si no fuera que cada vez que se trata de hacer un estudio serio de sistemas de jubilaciones, se dice que lo mejor es eliminar a los especialistas, a los competentes, y es mucho mejor hacer las cosas por pálpito y a dedo.

Sr. Rodríguez (J. R.). — ¿Quién ha dicho eso?

Sr. Bunge. — El señor diputado Bas, cuando la reforma pedida a la ley de jubilaciones ferroviarias.

El señor diputado por Santa Fe está en un grave error, y estoy seguro de que si la cámara incurriera en el de aceptar su indicación, él tendría que arrepentirse más tarde de haberla propuesto, pues sus consecuencias no pueden ser sino ruinosas para el porvenir de los empleados jóvenes, porque ésa será una modificación para exclusivo beneficio de los que pretenden gozar de las prestaciones de la caja sin haber contribuido a su formación.

Sr. Mora y Araujo. — Pido la palabra.

El señor diputado está dando una

importancia demasiado grande a los técnicos que se llaman actuarios. ¿De dónde va a sacar el señor diputado esos actuarios con la autoridad que les está confiriendo, para salvar a la caja? ¿De dónde va a sacar a esos actuarios con títulos suficientes para hacerlos árbitros del destino de la caja?

Sr. Rodríguez (J. R.). — Se trata de una fantasía germánica del señor diputado. (*Risas*).

Sr. Bunge. — Fantasía criolla es querer repartir a granel dinero cuando los dineros efectivos son limitados.

Lo que yo sostengo es la ciencia actuarial, de origen inglés y no germánico. Es la que tienen las compañías de seguros serias y honestas, y es la base de todas las leyes de seguro social en todos los países civilizados.

Si la cámara sancionara lo que propone el señor diputado, se daría un rasgo más de política criolla en esta ley, digna de sus antecedentes espurios en la caja nacional de pensiones y jubilaciones civiles.

Contestando a lo que dice el señor diputado por Corrientes, de que doy "demasiada" importancia a la intervención de los actuarios, diré que la valuación actuarial consiste ante todo en valuar las entradas previsibles, de acuerdo con los salarios computados por el censo, de acuerdo con la composición de edad de los afiliados, la movilidad y la mortalidad que debe preverse en ellos. Por igual método se valúan las obligaciones. Se hace esta valuación de obligaciones sobre determinadas hipótesis, sobre jubilados a los 50, 55 o 60 años, por ejemplo, y se balancean, como hacen los bancos, las obligaciones representadas por los probables jubilados a esos diferentes límites de edad. Se ve, entonces, si hay o no déficit, es decir, qué límite de edad puede fijarse prudentemente para tener derecho a la jubilación y qué monto de jubilación puede acordarse.

Es, pues, clarísimo. Eliminar la valuación actuarial es condenar a esta caja el saqueo durante los primeros diez años, como ha ocurrido con la caja nacional de jubilaciones y pensiones.

Sr. Anastasi. — La comisión mantiene su despacho.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Pido la palabra.

Voy a contestar muy rápidamente toda esta maraña de cosas extraordinarias que ha dicho el señor diputado por la capital hablando de saqueos posibles de la caja y de otra cantidad de cosas alarmantes, que únicamente él es capaz de alcanzar y comprender a través de sus confusas palabras.

La modificación propuesta se reduce a eliminar de los términos de la ley la obligación de pagar ciertos honorarios a pseudos profesionales — llamados actuarios — que crea la fantasía del señor diputado. No hay títulos de actuario. Yo no niego, sin embargo, que haya personas que se han especializado en el conocimiento de esta materia, que es una rama de las matemáticas, ¿pero para qué incrustar en la ley la obligación de pagar crecidos honorarios a funcionarios que no existen con derechos legítimos, sino en la fantasía del señor diputado Bunge, desde el momento que el directorio de esa caja, constituido por representantes de los bancos y de los empleados bancarios, ha de tener el más alto interés en hacer el cálculo de las prestaciones y la valuación actuarial de la forma más exacta para asegurar la buena financiación de la caja?

Puede estar seguro el señor diputado y la cámara que los mayores interesados en la mejor financiación de la caja no somos nosotros, sino los propios empleados de banco, que van a recibir el beneficio acordado por esta ley. Entonces el directorio, si, como espero, se suprimen los actuarios — no la valuación actuarial — habrá de asesorarse en esta materia con los doctores en ciencias económicas, contadores públicos o empleados de banco que se hayan especializado en esos estudios. En una palabra, lo que yo combato es la creación por esta ley de títulos de capacidad que no da ninguna universidad ni escuela del país. Es una fantasía germana o sajona, del señor diputado, pero fantasía, al fin.

Sr. Bunge. — Todos los doctores en ciencias económicas son actuarios.

Sr. Rodríguez (J. R.) — No ignora, sin duda, el señor diputado, que en los bancos, tanto nacionales como provinciales, hay doctores en ciencias económicas y contadores públicos y aun personas sin título alguno que se han especializado en esta rama de las matemáticas, a los que indiscutiblemente el directorio de la caja va a llamar para que lo asesoren cuando deba hacerse la valuación actuarial, y el señor diputado Bunge no supondrá que en esa oportunidad el directorio ha de recurrir a un ordenanza o a un portero, para cumplir tareas de tanta importancia y responsabilidad.

Con respecto a las referencias despectivas que ha hecho el señor diputado Bunge, de la capacidad que yo he atribuido con justicia a los empleados bancarios argentinos, no tengo por qué entrar en polémica con él, sino afirmar mi concepto absolutamente contrario al suyo: tengo la seguridad de que en nuestros establecimientos bancarios hay una gran cantidad de empleados de toda categoría con gran capacidad para estudiar y resolver las cuestiones económicas y financieras más importantes y ojalá tuvieran ellos más participación en el examen de muchas de nuestras grandes cuestiones, porque las resolverían mejor que muchos legisladores y que muchos de los llamados hombres de gobierno.

Insisto en que se suprima del despacho toda referencia a los actuarios, que podría redundar en beneficio de los que se atribuyen a sí mismos ese título, que nadie ha otorgado con derecho, y se puede mantener la obligación de que el directorio con técnicos capacitados haga la valuación actuarial y todos los estudios necesarios. Creo que también podría reducirse a un año el término en que esa tarea debe cumplirse.

Nada más, señor presidente.

Sr. Bunge. — Pido la palabra, para una brevísima rectificación.

Convengo en que el trabajo completo puede hacerse en el plazo de un año. Dice el señor diputado que la

ley prescribe que se acada a especialistas no empleados de la caja. No hay tal cosa. Lo que prescribe esta ley es un método determinado de valuación de las obligaciones y de los recursos previsibles de la caja. Este método es el actuarial. Si hay en el directorio o entre los empleados hombres capaces de hacerlo, podrán encargarse de ello. La valuación actuarial puede hacerla todo el que entienda de matemáticas de seguros, cualquier doctor en ciencias económicas o simple contador que haya hecho esos estudios. Lo que prescribe la ley es un método de valuación, no que lo hagan determinados especialistas.

Sr. Rodríguez (J. R.) — ¿Para qué hablar entonces de actuarios, si el directorio de la caja puede asesorarse de técnicos capacitados, aunque no ostenten ese título fantástico que nadie otorga?

Sr. Amuchástegui. — Actuario no es un título legal.

Sr. Anastasi. — Lo que desea la comisión es que se haga valuación actuarial, porque ello es necesario, no digo para una ley de jubilaciones, sino para la más modesta compañía de seguros. Ahora, si el título de actuario no existe, no hay inconveniente en que el directorio designe una comisión técnica, sin hacer mención de actuarios.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Voy a enunciar ante la cámara una duda que me sugiere el último apartado de este artículo y formular una observación que espero sea recogida por la comisión con el objeto de que quede disipada toda duda que pudiera haber sobre este artículo, que es uno de los principales del proyecto en discusión.

Dice el apartado a que me refiero: "el directorio determinará los beneficios del artículo 2º en una reglamentación especial, dando cuenta al honorable congreso, que servirá de base para dictar la ley orgánica de la caja".

Mi pregunta a la comisión se concreta a lo siguiente: Si lo que se de-

termina en este artículo es que el directorio va a proyectar simplemente las condiciones dentro de las cuales se va acordar, cuando el congreso sancione la respectiva ley orgánica, los beneficios de la jubilación y de la pensión, o si, por el contrario, esta facultad de reglamentar especialmente este beneficio significa acordar al directorio la facultad de poderlo realizar antes de elevar a la consideración del congreso el proyecto de ley definitiva.

Sr. Anastasi. — Por resolución de la comisión, el propósito del artículo era que el directorio sólo proyectaría los beneficios. Por mi parte yo había propuesto que si el congreso no dictaba la ley orgánica, esa reglamentación pudiera ponerse en vigencia con la aprobación del poder ejecutivo, pero la comisión rechazó mi propuesta.

De manera que el artículo quiere decir lo que expresa, y para condensar los propósitos de la comisión debería quedar redactado en esta forma: "El directorio de acuerdo con estas bases propondrá los beneficios del artículo 2º en una reglamentación especial" Se trata de cambiar la palabra "determinará" por "propondrá".

Sr. de la Vega. — ¿De manera que el directorio no puede acordar, bajo ningún concepto, jubilación o pensión y su misión se reduce por ahora a elevar un proyecto de ley?

Sr. Anastasi. — Efectivamente; nada más por ahora, dentro del plazo que se señala.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Desearía saber cómo ha quedado el artículo de la comisión si se suprimen los famosos actuarios, como yo propongo.

—Reassume la presidencia el coronel don Ricardo Pereyra Rozas.

Sr. Secretario (Zambrano). — Es así: "El directorio designará una comisión técnica, la que en el plazo máximo de un año levantará..." El resto de esta primera parte del artículo queda como está en el despacho. La

segunda parte: "El directorio de acuerdo con estas bases propondrá los beneficios..."

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Amuchástegui. — Voy a proponer un agregado a este artículo. Es el siguiente: "Los términos a que se refiere el artículo 17 serán graduados en la facultad de ciencias económicas".

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el agregado.

—Resulta negativa.

Sr. Amuchástegui. — ¿De cuántos votos?

Sr. Secretario (González Bonorino). — De once votos señor diputado.

Sr. Amuchástegui. — Sepan, entonces, los alumnos de la facultad de ciencias económicas que pueden contar con once votos.

14

HOMENAJE

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Señores diputados:

La presidencia tiene el pesar de comunicaros el fallecimiento de Mariano Demaría.

Pierde la cámara con esta muerte uno de sus espíritus más selectos y una de sus figuras más características y representativas. Su apostura gallarda, varonil y simpáticamente bondadosa ha de perdurar en este recinto, en donde su inteligencia ilustró tantos debates.

Hombre de partido, su acción fué fervorosa, alta y ponderada; hombre de parlamento, su palabra fué elocuente y oportuna y su acción intensa y eficiente. Como presidente del cuerpo, mereció el respeto y la estimación de todos por su acierto y serenidad.

Ha muerto un señor, porque tal fué su signo, ya que en la vida estos altos

exponentes de la sociedad llevan dentro de sí mismo su propio señorío.

En homenaje a su memoria invito a la cámara a ponerse de pie.

—Pónense de pie los señores diputados y la concurrencia.

Sr. Moreno (R.) — Pido la palabra.

La actuación del doctor Mariano Demaría en esta cámara ha sido excepcional, no solamente desde su banca de diputado sino por la circunstancia de haber presidido durante dos períodos las deliberaciones de este cuerpo acreditando desde el elevado sitio las condiciones que todos le reconocieron sin discusiones ni discrepancias.

Entendiendo que se le debe tributar un homenaje que guarde proporciones con estos antecedentes, yo pediría a la cámara que suspendiera su labor y pasara a un cuarto intermedio breve como acentuación del respeto y la consideración que los señores diputados tienen para la memoria del gentil compañero e ilustre ciudadano.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Invito a la cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Son las 19 y 35.

15

JUBILACION DE EMPLEADOS DE BANCO

—Se reanuda la sesión a las 19 y 45.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — En discusión el artículo 18.

—Se aprueba sin observación, así como el 19 y el 20.

—En discusión el artículo 21.

Sr. Secretario (Zambrano).—El señor diputado Jorge Raúl Rodríguez observa este artículo y propone en su reemplazo el siguiente: “Quedan comprendidas en los beneficios de la presente las empresas de banco de jurisdicción nacional y las que tengan agen-

cias o sucursales en la capital federal o territorios nacionales. Las de bancos provinciales y municipales podrán acogerse a sus beneficios siempre que sus representantes y los de los empleados lo soliciten dentro de los seis meses de su promulgación.

“El poder ejecutivo, a requerimiento del directorio, queda facultado para impedir el funcionamiento de cualquier banco, sucursal o agencia que omitiera reiteradamente el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley”.

Sr. Amuchástegui. — Pido que se repita la lectura, porque no hemos oído, señor presidente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio y les pide encarecidamente que no se retiren del recinto, dado el quórum precario, para no malograr la sanción de esta ley. (*¡Muy bien!*)

Se va a leer nuevamente.

—Se repite la lectura del artículo propuesto por el señor diputado Rodríguez (J. R.) como artículo 21, en substitución del despacho de la comisión.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra, para decir dos solamente, señor presidente.

Se trata en mi proposición de cambiar la redacción del despacho de la comisión, que es optativa, por una forma imperativa que obligue a todas las empresas de banco que estén dentro de la jurisdicción nacional, a acogerse a los beneficios y cumplir las obligaciones de esta ley.

Sr. Anastasi. — La comisión acepta la proposición, porque lo que ella ha querido es establecerla imperativamente.

—Se aprueba el artículo en la forma leída.

—Sin observación, se aprueban los artículos 22, 23 y 24 del despacho de la comisión.

—En discusión el artículo 25.

Sr. Secretario (Zambrano). — El señor diputado Jorge Raúl Rodríguez observa que por error de imprenta se han deslizado dos plurales en este artículo.

Sr. Anastasi. — En efecto: debe corregirse.

Sr. Secretario (Zambrano). — Queda corregido.

—Se aprueba el artículo 25.

—En discusión el artículo 26.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra.

He pedido la supresión de este artículo porque me parece inconveniente e innecesario mantenerlo en la ley que estamos considerando.

Es injusto, desde luego y podría ser tachado de inconstitucional si se aprobara. Se refiere a los fondos que algunos bancos particulares han acumulado por descuentos sucesivos de los haberes de su personal para proveer a las jubilaciones que cada uno pensaba acordar.

No hay por qué colocar a los empleados que durante algunos años han hecho estos ahorros obligados a su propia costa, en desventaja con respecto al resto del personal bancario. A todos los empleados de banco, desde el momento que se dicta esta ley debe aplicárseles las mismas disposiciones y sometérselos a idéntico descuento. No hay por qué retener estos fondos que son en realidad propiedad de ellos, aunque se les acredita de tal o cual manera. Son fondos particulares, y únicamente sus dueños pueden darles destino.

Por eso pido a la comisión que suprima este artículo.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión no tiene interés en mantener ese artículo; acepta la supresión que le ha sido, por otra parte, requerida por casi todos los interesados que forman parte de estas cajas particulares. El primitivo propósito era reunir las cajas particulares y acordar a cada interesado el importe de sus aportes.

Pero en atención a que unánimemente los que constituyen estas cajas particulares han requerido también la supresión de este artículo, la comisión no insiste.

Sr. O'Reilly. — Pido la palabra.

Deseo hacer una pregunta al señor miembro informante: El dinero que corresponde a las empresas o a los bancos, porque a estas cajas contribuyen los bancos con un tanto por ciento, ¿irá a los bancos o se repartirá a los empleados?

Sr. Anastasi. — Eso queda librado a cada caja particular. El primitivo propósito de la comisión era fusionar estas cajas particulares, pero habiendo encontrado oposición en ese propósito, ella desistió de este artículo. Quiere decir que las cajas particulares continuarán rigiéndose en esto por los principios con que se rigieron para su fundación.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Queda suprimido el artículo 26.

—En discusión el artículo 27.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido que se dé lectura del artículo que yo he propuesto en reemplazo del despacho.

—Se lee:

“El personal de las empresas comprendidas en esta ley que hubiera dejado de formar parte de ellas, a partir del primero de enero de 1922 hasta que se dicte la ley orgánica, por causas que no fueran de mala conducta comprobada, puede acogerse a los beneficios de la misma. Igual beneficio se reconoce a los herederos con derecho a percibir pensión”.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra.

El concepto es el mismo de la comisión, pero desenvuelto con más amplitud en el artículo que yo propongo, porque prevé ahí esa situación para los empleados enfermos o fallecidos desde el primero de enero de 1922 hasta el día que se dicte la ley orgánica de la caja y no esta ley básica, como podría entenderse por el texto de la comisión.

Sr. Maidana. — Me parece muy completo el pensamiento así.

Sr. Anastasi. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Habiendo sido aceptado por la comisión, queda incorporado al despacho.

—Se aprueban los artículos 27 y 28, siendo el siguiente de forma.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Queda sancionado.

Sr. Pinto. — Pido que se comunique de inmediato al senado.

—Asentimiento.

16

DECRETO DE HONORES

Sr. Secretario (Zambrano). — La presidencia ha dictado, con motivo del fallecimiento del señor diputado doctor Demaría, el siguiente decreto:

“Ocurrido en la fecha el fallecimiento del señor diputado por el distrito electoral de la provincia de Buenos Aires y ex presidente de la honorable cámara, doctor Mariano Demaría,

El presidente de la honorable cámara de diputados de la nación

DECRETA:

1º—Que la bandera nacional se coloque a media asta en el palacio del congreso, en señal de duelo, durante los días 21 y 22 del corriente.

2º—Designar una comisión en representación de la honorable cámara, compuesta de los señores diputados Rodolfo Moreno (hijo), Angel Sánchez Elía, Mariano P. Ceballos, Alberto de Bary y Carlos M. Pradère, para velar y acompañar los restos del extinto, debiendo hacer uso de la palabra en el acto del sepelio el señor diputado Rodolfo Moreno.

3º—Dirigir una nota de pésame a la familia y colocar una placa de bronce en su tumba.

4º—Los gastos del sepelio serán por cuenta de la honorable cámara.

5º—Comuníquese a quienes corresponda y archívese.

Sala de la presidencia, 21 de septiembre de 1923.

R. PEREYRA ROZAS.
Carlos González Bonorino.

17

LEY BASICA DE SEGURO NACIONAL

Sr. Dickmann (A.) — Señor presidente: corresponde que se entre a considerar el despacho número 49, que no exigirá sino breves minutos de la honorable cámara, por ser un despacho en el que no hay disidencia.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Sí, señor diputado; es lo que corresponde.

Honorable cámara:

Vuestra comisión de legislación del trabajo ha tomado en consideración el proyecto de ley de seguro nacional presentado por los señores diputados Bunge y otros; y el proyecto de ley básica de seguro nacional, despachado por la anterior comisión el año 1921, y reproducido por el señor diputado López Anaut; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

CAPITULO I

Normas y fundamentos

Artículo 1º — Institúyese una comisión especial, formada por cinco diputados y dos senadores designados por sus respectivos cuerpos, la cual tendrá a su cargo el estudio y redacción de un proyecto de ley orgánica de seguro nacional con arreglo a los principios de esta ley.

Art. 2º — La ley organizará el seguro nacional como mancomunidad de toda la población laboriosa de la república, instituida por el estado, a los fines de la previsión de los riesgos que comprende y la administración de su asistencia por los mismos asegurados, con el concurso de los empleadores y del estado.

Art. 3º — Serán prestaciones ordinarias,